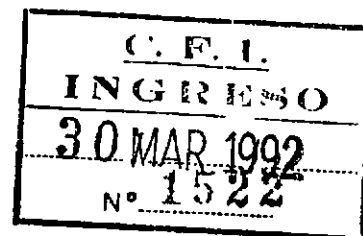


*Félix Adolfo Lamas*  
Abogado  
Doctor en Ciencias Jurídicas

0  
N 23211  
L 11  
I



Buenos Aires, 30 de marzo de 1992.

Sr.  
Secretario General del  
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
Ing. D. Juan José Ciacera  
Su Despacho

Asunto: INFORME DE AVANCE. Proyecto de reforma del  
Código Tributario de la Provincia de  
San Juan.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Secretario General con el objeto de hacerle llegar un INFORME DE AVANCE respecto del anteproyecto de reforma del Código Tributario de la Provincia de San Juan.

Al respecto, informo a Ud. que con fecha 2-3-92 viajé a la Provincia de San Juan, acompañado por el Sr. Cont. D. Fernando Posse, con el fin de tomar contacto con las autoridades fiscales de dicho Estado e interiorizarme de las necesidades y requerimientos de las mismas en orden a un proyecto de reforma del Código Tributario provincial. Mi labor en San Juan se prolongó hasta el 4-3-92 inclusive.

Con el presente adjunto original y dos copias de un anteproyecto de reforma integral del Libro Primero del Código Tributario de la Provincia de San Juan.

Sin otro particular, aprovecho para saludar a Ud. con mi consideración más distinguida.



*Félix Adolfo Lamas*  
FELIX ADOLFO LAMAS  
ABOGADO  
T° 19 - F° 658  
MAT. C.S.J.N.

36 338

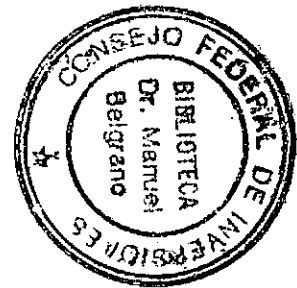
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Anteproyecto de

CODIGO TRIBUTARIO  
DE LA  
PROVINCIA DE SAN JUAN

Redactor:

Dr. Félix Adolfo Lamas



0/5 23211  
L 11  
I

BUENOS AIRES

1992

## INDICE

Página

### TITULO PRELIMINAR

CAPITULO I: <u>Ambito de aplicación</u> .....	1
CAPITULO II: <u>Las normas tributarias</u> .....	1

### LIBRO PRIMERO: PARTE GENERAL

#### TITULO I: SUJETO ACTIVO

CAPITULO I: <u>La Dirección General de Rentas</u> .....	4
CAPITULO II: <u>Facultades</u> .....	6
CAPITULO III: <u>Deberes</u> .....	9

#### TITULO II: SUJETOS PASIVOS

CAPITULO I: <u>Contribuyentes</u> .....	12
CAPITULO II: <u>Responsables por deuda ajena</u> .....	13
CAPITULO III: <u>Solidaridad</u> .....	13
CAPITULO IV: <u>Responsabilidad por hechos u omisiones de gestores y dependientes</u> .....	14
CAPITULO V: <u>Domicilio fiscal</u> .....	15
CAPITULO VI: <u>Deberes relativos a la verificación y fiscalización de tributos</u> .....	16

#### TITULO III: OBJETO Y DETERMINACION DEL TRIBUTO

CAPITULO I: <u>Hecho y materia imponible</u> .....	18
CAPITULO II: <u>Determinación del tributo</u> .....	19
CAPITULO III: <u>Exenciones y otros beneficios fiscales</u> .....	20

#### TITULO IV: EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

CAPITULO I: <u>Pago</u> .....	22
CAPITULO II: <u>Compensación</u> .....	23
CAPITULO III: <u>Transacción</u> .....	24
CAPITULO IV: <u>Confusión</u> .....	25
CAPITULO V: <u>Condonación o Remisión</u> .....	25
CAPITULO VI: <u>Prescripción</u> .....	26

## TITULO V: INTERESES

CAPITULO I:	<u>Intereses resarcitorios</u> .....	29
CAPITULO II:	<u>Intereses moratorios</u> .....	29
CAPITULO III:	<u>Intereses punitorios</u> .....	30

## TITULO VI: PAGOS A CUENTA

CAPITULO I:	<u>Anticipos</u> .....	32
CAPITULO II:	<u>Retenciones y percepciones a cuenta del tributo</u> .....	33
CAPITULO III:	<u>Pago a cuenta del tributo adeudado</u> .....	33

## TITULO VII: CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS

CAPITULO I:	<u>Normas y principios generales</u> .....	34
CAPITULO II:	<u>Contravenciones formales</u> .....	36
CAPITULO III:	<u>Contravenciones materiales</u> .....	37

## TITULO VIII: PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO I:	<u>Normas generales</u> .....	39
CAPITULO II:	<u>La fiscalización</u> .....	41
CAPITULO III:	<u>La determinación de oficio</u> .....	42
CAPITULO IV:	<u>La repetición de tributos</u> .....	45
CAPITULO V:	<u>Los sumarios contravencionales</u> .....	46
CAPITULO VI:	<u>Recursos</u> .....	47
CAPITULO VII:	<u>Denuncia y querrela penal</u> .....	48
CAPITULO VIII:	<u>Normas supletorias</u> .....	48

## TITULO IX: PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

CAPITULO I:	<u>Los representantes fiscales</u> .....	49
CAPITULO II:	<u>El juicio de apremio</u> .....	50
CAPITULO III:	<u>El Tribunal Fiscal</u> .....	52
CAPITULO IV:	<u>Procedimiento ante el Tribunal Fiscal</u> .....	53
CAPITULO V:	<u>Recursos</u> .....	56
CAPITULO VI:	<u>Normas supletorias</u> .....	57

## TITULO PRELIMINAR

### CAPITULO I

#### Ambito de aplicación

ARTICULO 1º: Este Código rige la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos provinciales y las relaciones jurídicas emergentes de los mismos.

Rige también supletoriamente la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos municipales, en todo aquello que no esté previsto en la legislación y ordenanzas respectivas.

ARTICULO 2º: Las normas de este Código son de aplicación en todo el territorio de la Provincia y en los ámbitos y oficinas sujetos vincial, cuya fuente económica esté situada en la Provincia, y que por su naturaleza deban tener efecto económico en ésta o en el patrimonio de sus habitantes, están también alcanzados por las disposiciones de este Código en la medida en que estén comprendido en las tipificaciones de los hechos imponibles o generadores de cada tributo.

ARTICULO 3º: Los actos y procedimientos en materia tributaria realizados por, o en los que sean parte, las autoridades jurisdiccionales administrativas o judiciales de otras provincias o de la Nación, conformes con la legislación respectiva, harán plena fe de los hechos contenidos en ellos, en las mismas condiciones y con los mismos alcances que los realizados por las autoridades provinciales de acuerdo con las normas del presente Código.

### CAPITULO II

#### Las normas tributarias

ARTICULO 4º: El orden de prelación de las normas tributarias, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 31 de la Constitución Nacional y el artículo 11 de la Constitución de la Provincia, es el siguiente:

- 1º) Las normas del presente Código.
- 2º) Las normas tributarias o fiscales contenidas en otras leyes.
- 3º) Los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo.
- 4º) Las normas reglamentarias complementarias dictadas por la Dirección General de Rentas o por la que resulte Autoridad de Aplicación del presente

Código.

ARTICULO 5º: Compete exclusivamente a la ley tributaria:

1º) Establecer, modificar o suprimir tributos; definir el hecho imponible o generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y la alícuota del tributo; definir el sujeto pasivo del mismo.

2º) Establecer con carácter general exenciones, deducciones, reducciones o cualquier clase de beneficio fiscal.

3º) Establecer obligaciones fiscales accesorias, tipificar ilícitos y preceptuar sanciones.

4º) Reglamentar procesalmente el ejercicio de las garantías y derechos constitucionales.

5º) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos del pago.

ARTICULO 6º: La interpretación de las disposiciones de este Código y de las normas tributarias sujetas a su régimen debe atender principalmente al fin de las mismas y a su significación económica.

Cuando la ley tributaria incluya en la definición de los hechos imposables o generadores o en lo supuestos de exenciones, relaciones o figuras jurídicas típicas, deberá estarse a la significación de las mismas, salvo que se verifique la hipótesis de elusión o de uso abusivo de aquéllas de acuerdo con lo previsto por la segunda frase del artículo 57.

ARTICULO 7º: Los casos que no puedan ser resueltos por la aplicación inmediata de las disposiciones de este Código o de las leyes tributarias, de acuerdo con su letra, su espíritu o finalidad, serán juzgados según las siguientes reglas:

1º) Las normas analógicas de este Código o de las leyes tributarias, respetando el principio de legalidad y tipicidad tributaria enunciado en el art. 5º.

2º) Los principios jurídico-financieros que rigen la tributación.

3º) Los principios generales del Derecho.

4º) Los principios y normas del Derecho Privado.

ARTICULO 8º: Las exenciones y demás beneficios fiscales son de interpretación estricta. Respecto de los mismos no caben métodos de interpretación extensivos o restrictivos.

ARTICULO 9º: Las leyes tributarias son de orden público. Las convenciones que realicen entre sí los contribuyentes o responsables respecto a la carga de los tributos no son oponibles al fisco, excepto cuando las mismas estén autorizadas o previstas por las normas tributarias y en la medida que éstas lo determinen.

ARTICULO 10º: Las normas tributarias sólo son obligatorias a partir de su publicación oficial y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, son obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.

ARTICULO 11º: Las leyes tributarias no tienen efecto retroactivo, salvo disposición en contrario. La retroactividad de la ley no puede afectar derechos incorporados definitivamente al patrimonio de contribuyentes y responsables al amparo de la legislación vigente al momento de perfeccionarse los actos, hechos, situaciones o relaciones que los originaron. No se consideran retroactivas las disposiciones legales que afecten la existencia o cuantía de la obligación tributaria, respecto de tributos que se determinan o liquidan por ejercicios o períodos fiscales, cuando la vigencia de las mismas sea anterior al momento del vencimiento general de la obligación o al pago de la misma, el que sea posterior.

ARTICULO 12: En ningún caso las normas reglamentarias pueden tener efectos retroactivos.

ARTICULO 13: Para todos los términos establecidos en días se computarán únicamente los días hábiles, administrativos o judiciales según los casos. Cuando términos o plazos vencieren en día inhábil, los mismos se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente.

LIBRO PRIMERO

PARTE GENERAL

TITULO I: SUJETO ACTIVO

CAPITULO I

La Dirección General de Rentas

ARTICULO 14: La Dirección General de Rentas, que se llamará en este Código la Dirección General o simplemente la Dirección, es la autoridad administrativa de aplicación de este Código y de las leyes tributarias especiales sujetas a su régimen, salvo los casos en que, expresamente, las leyes atribuyan esta potestad a otros órganos del Estado. En tal carácter, la Dirección General tiene a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos provinciales regidos por el presente.

Las funciones, poderes o facultades y deberes que este Código atribuye a la Dirección General de Rentas se extenderán también a todo otro órgano del Estado que sea legalmente investido en el carácter de Autoridad de Aplicación de aquél, con las modalidades y modificaciones que resulten de la legislación respectiva.

Sin perjuicio de lo que dispongan las leyes administrativas o las normas orgánicas, estatutarias o de estructura que regulen a la Dirección General de Rentas u otros órganos del Estado que resulten Autoridad de Aplicación de este Código, ésta reviste el carácter de sujeto de derecho en materia tributaria y goza de personería activa y pasiva para estar en juicio.

ARTICULO 15: La Dirección General tiene las siguientes funciones específicas:

1º) Formar y actualizar los registros y padrones correspondientes a los distintos conceptos de los recursos tributarios.

2º) Recaudar, contabilizar, verificar y fiscalizar los tributos.

3º) Determinar y devolver, compensar o acreditar tributos.

4º) Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones de este Código y demás leyes tributarias.

5º) Resolver las cuestiones atinentes a exenciones tributarias con relación a contribuyentes o responsables determinados.

6º) Intervenir, cuando le sea requerido por los Poderes provinciales competentes, en la elaboración de anteproyectos o proyectos de leyes y



reglamentos en materia tributaria.

79) Requerir directamente de las demás reparticiones de la Administración Provincial los informes y la colaboración que fueren necesarios a los fines del mejor cumplimiento de las funciones que se le asignan por este Código o leyes especiales.

80) Dictar normas reglamentarias complementarias.

ARTICULO 16: Las funciones que este Código o las leyes especiales confieren a la Dirección General de Rentas o al órgano del Estado que resulte autoridad de aplicación del mismo son exclusivas y excluyentes respecto de cualesquiera otras autoridades. La jurisdicción administrativa que este Código y las leyes confieren a dicha autoridad es originaria e improrrogable.

Todas las funciones y poderes atribuidos por este Código y otras leyes a la Dirección General, serán ejercidas por el Director General o, en su defecto, por el Subdirector General o funcionario que reemplace a aquél.

En el ejercicio de sus funciones el Director General representa a la Dirección General frente a los poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros.

ARTICULO 17: El Director General podrá delegar funciones y facultades en otro funcionario dependiente de él, en forma general o especial, sujeto a las siguientes condiciones:

a) La delegación no debe estar prohibida ni regulada específicamente con un alcance distinto por este Código, las leyes especiales y sus respectivos decretos reglamentarios u otras normas emanadas del Poder Ejecutivo o de la autoridad de superintendencia de la Dirección General. En particular, no son delegables por aplicación del régimen establecido por el presente artículo las funciones de juez administrativo.

b) La delegación debe efectuarse mediante resolución escrita.

c) La misma debe efectuarse de acuerdo con la distribución de competencias que surge de la estructura de la Dirección General.

d) Cuando dicha delegación afecte a contribuyentes, responsables, terceros, o a otras reparticiones de la administración pública provincial, la resolución mediante la cual se efectúe la delegación deberá ser publicada oficialmente.

ARTICULO 18: En cada Departamento de la Provincia donde fuere necesario y cuando el Poder Ejecutivo lo determine, habrá por lo menos una delegación de la Dirección General que tendrá a su cargo la recaudación de los tributos, la emisión de certificados de deudas, y las demás funciones que resulten del acto de su creación y de la estructura orgánica de la repartición.

La competencia de la Dirección General podrá distribuirse, en razón de la materia o del territorio, en Delegaciones, Zonas, Departamentos, etc., mediante las normas de estructura que dicte el Poder Ejecutivo.

ARTICULO 19: Además del Director General, y en carácter de delegados del mismo, cumplirán funciones de juez administrativo los siguientes funcionarios:

1º) El Subdirector General.

2º) Los Jefes de las Delegaciones, Zonas, Departamento, etc., en la medida de la competencia que les atribuyan las normas de estructura o los reglamentos dictados por el Poder Ejecutivo.

En todos los casos en que se autoriza la intervención de jueces administrativos delegados, el Director General podrá avocarse al conocimiento y decisión de las cuestiones planteadas.

Los funcionarios que cumplan funciones de juez administrativo deben ser contadores públicos o abogados. El Poder Ejecutivo podrá eximir de este requisito a aquellos funcionarios que tengan una antigüedad mínima de cinco años en la Dirección General.

ARTICULO 20: Son funciones exclusivas de los jueces administrativos:

1º) La impugnación de las declaraciones juradas presentadas por contribuyentes y responsables y la determinación de oficio de la materia imponible, de quebrantos y del tributo.

2º) La aplicación de sanciones.

3º) La resolución acerca de pedidos o recursos de repetición de tributos y sus accesorios en instancia administrativa.

4º) Los actos por los que se resuelva requerir de los jueces competentes allanamiento de domicilios, secuestro de bienes y clausuras preventivas, salvo cuando estas medidas se pidan en juicio, en cuyo caso podrán ser solicitadas por el representante fiscal respectivo.

Previo al dictado de resolución y como requisito esencial, el juez administrativo no abogado requerirá dictamen del servicio jurídico.

ARTICULO 21: Ningún otro funcionario, aun cuando fuere superior jerárquico del Director General o ejerza superintendencia sobre éste, podrá sustituir a los jueces administrativos en sus funciones específicas ni avocarse al conocimiento o decisión de las cuestiones sujetas a la resolución de los mismos.

## CAPITULO II

### Facultades

ARTICULO 22: La Dirección General tiene todos los poderes y facultades que surgen de sus funciones de aplicación, percepción y fiscalización de los tributos.

ARTICULO 23: La Dirección General está facultada para dictar normas

generales reglamentarias y complementarias, de carácter obligatorio para contribuyentes, responsables y terceros, sobre las siguientes materias:

1º) Todas aquellas que resultan de las atribuciones conferidas por ese Código, las leyes tributarias y demás leyes especiales, con las limitaciones establecidas en dichos cuerpos legales.

2º) Inscripción de contribuyentes y responsables, y obligaciones de éstos y terceros relativas a la facilitación de las tareas de fiscalización y verificación; en especial, formas y modos de registro de operaciones, obligación de emitir facturas, comprobantes o documentos equivalentes, y requisitos formales de los mismos.

3º) Forma y plazos de presentación de las declaraciones juradas o de los formularios de liquidación administrativa de tributos, modos, formas y plazos de su percepción, así como de sus intereses, pagos a cuenta, multas y eccesorios de éstos.

4º) Forma de documentar las deudas fiscales por parte de contribuyentes y responsables y régimen de garantías de las mismas cuando ellas fueren exigibles.

5º) Creación, actuación y supresión de agentes de percepción y retención, en los casos de percepción de tributos en la fuente previstos o autorizados por este Código o leyes especiales.

6º) Requisitos formales o probatorios que deben cumplir contribuyentes y responsables para solicitar certificaciones, inscripciones o reconocimiento de exenciones, prórrogas, acogimiento a regímenes de presentación espontánea, formular consultas, constituir, suprimir o modificar domicilios fiscales y especiales, y compensaciones, acreditaciones y transferencias de créditos fiscales.

ARTICULO 24: El dictado de las normas reglamentarias complementarias aludidas en el artículo anterior está reservado al Director General o al funcionario que lo reemplace. Dichas normas deben ser publicadas en el Boletín Oficial y pueden ser dejadas sin efecto o modificadas por el Poder Ejecutivo, por el Secretario de Hacienda y Finanzas y por el Director General.

Los contribuyentes, responsables y terceros que invoquen fundadamente un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán deducir contra las normas reglamentarias complementarias que lo afecten un recurso de apelación para ante el Secretario de Hacienda y Finanzas dentro de los quince días siguientes a la publicación de las mismas. El recurso deberá presentarse ante dicho Secretario, el cual dará vista a la Dirección General para que se expida acerca de la impugnación en un término máximo de diez días.

ARTICULO 25: La Dirección General tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de períodos fiscales en curso, el cumplimiento que los contribuyentes, responsables y terceros den a las disposiciones de este Código, de las leyes tributarias y especiales y de sus respectivas reglamentaciones, fiscalizando o investigando la situación de cualquier presunto responsable. En el ejercicio de esta función, podrá en especial:

1º) Citar al firmante de la declaración jurada o información administrativa, al presunto contribuyente o responsable o a cualquier tercero que tenga o pueda tener conocimiento de las operaciones de aquéllos, para contestar o informar verbalmente o por escrito, según se estime conveniente, y dentro de un plazo fijado prudencialmente, todas las preguntas o requerimientos que se les hagan sobre cualquier circunstancia vinculada con el hecho imponible o generador de los tributos o sobre las demás obligaciones accesorias o ilícitos tributarios.

2º) Exigir de los contribuyentes, responsables y terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran a los hechos y circunstancias señaladas en el inciso anterior.

3º) Inspeccionar libros, anotaciones, papeles, documentos y sistemas de computación de contribuyentes, responsables y terceros, que puedan registrar o comprobar las operaciones que se estimen vinculadas con los datos que contengan o deban contener las declaraciones juradas y las informaciones administrativas. La inspección podrá efectuarse concomitantemente con la realización o ejecución de los actos u operaciones que interesen a la verificación o investigación.

4º) Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando se tropezare con inconvenientes o resistencias en el ejercicio de sus funciones, cuando dicho auxilio fuere menester para hacer comparecer a responsables y terceros o cuando fuere necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento y secuestro de bienes. El auxilio requerido deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario autorizado que lo haya requerido y, en su defecto, el funcionario o empleado policial responsables de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas y las que pudieren corresponder por aplicación de este Código.

5º) Recabar ante el juez competente orden de allanamiento y secuestro de bienes, debiendo especificarse en la solicitud el lugar y oportunidad en que habrá de practicarse. La solicitud deberá ser despachada por el juez dentro de las veinticuatro horas, habilitando días y horas si fuere solicitado.

ARTICULO 26: Las autoridades de aplicación de los regímenes de promoción industriales, regionales, municipales, sectoriales o de otra clase que concedan beneficios impositivos, deberán recibir, considerar y resolver en términos de urgente despacho las denuncias u observaciones que formule la Dirección General ante aquéllas y que se refieran al presunto incumplimiento por parte de los responsables de las condiciones legales o contractuales de las que dependan los beneficios aludidos.

La Dirección General no tendrá facultades para resolver la caducidad parcial o total de las medidas de carácter promocional, pero sí podrá fiscalizar el cumplimiento tributario que los beneficiarios hicieran de las mismas. Cuando en uso de sus atribuciones legales constatare el incumplimiento de las normas promocionales vinculadas con la tributación, y sin perjuicio de la notificación, observación o denuncia oportuna formulada ante la autoridad de aplicación promocional, la Dirección General podrá iniciar las acciones de determinación, contravencionales y de cobro previstas

por este Código.

ARTICULO 27: La Dirección General no está obligada a evacuar consultas por escrito, salvo que así lo prevean las normas tributarias especiales. Cuando no esté previsto un régimen legal especial de consultas, las opiniones de los funcionarios en respuesta a las mismas no serán recurribles ni vinculantes, ni para los consultantes ni para la propia Dirección General.

### CAPITULO III

#### Deberes

ARTICULO 28: En el ejercicio de sus poderes y facultades de verificación, fiscalización e investigación, la Dirección General deberá, en la medida de lo posible y sin perjuicio de la eficacia de su tarea:

1º) Respetar la intimidad y el decoro de contribuyentes, responsables y terceros.

2º) No impedir u obstaculizar de manera relevante el ejercicio de las actividades normales del contribuyente, responsable o tercero.

3º) No ocasionar gastos o perjuicios de consideración en relación con las circunstancias del interesado.

ARTICULO 29: La designación de agentes de retención y percepción, y cualquiera otra que pueda efectuar la Dirección General con carácter de carga pública por autorización legal, deberá recaer siempre en personas o sujetos residentes o radicados en el lugar donde deben desempeñar sus funciones, sin que pueda obligárseles a efectuar viajes o cambios de domicilio en razón del desempeño de las mismas, y evitando en todo caso cualquier erogación o perjuicio innecesario o de significación de acuerdo con las circunstancias del designado.

ARTICULO 30: Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 10 -párrafos 1º y 2º- de la Ley Provincial de Procedimientos Administrativos, la Dirección General no puede ampararse en el silencio para no dar respuesta oportuna a las solicitudes o reclamos que los contribuyentes, responsables y terceros le formulen sobre casos reales y fundados en razones de legalidad. La violación de esta norma constituirá una falta administrativa grave.

ARTICULO 31: Cuando los contribuyentes, responsables o terceros deban acreditar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, su condición de sujetos exentos o liberados del tributo o, en general, cualquier circunstancia que haga a su situación tributaria, podrán solicitar a la Dirección General el

certificado correspondiente, aportando la información o documentación que ésta le exigiere, la cual podrá, si lo considerare conveniente, usar en el caso sus poderes de verificación y fiscalización. Los certificados extendidos por la Dirección General sólo tendrán efecto liberatorio respecto de contribuyentes y responsables cuando se emitieren sobre la base de resoluciones firmes, o cuando así surja del propio documento.

ARTICULO 32: Las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los contribuyentes, responsables o terceros presenten a la Dirección General, y las actuaciones administrativas y judiciales, en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretos. Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Dirección General, están obligados a mantener el más estricto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones que esté directamente vinculado con dichas informaciones, sin poder comunicarlas a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos y demás funcionarios competentes.

Las informaciones y demás circunstancias protegidas por el secreto establecido por el presente artículo no serán admitidas como pruebas en causas judiciales ajenas a los procedimientos respectivos a las mismas, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en las cuestiones de familia, o en los procesos criminales cuando aquéllas se hallen relacionadas con los hechos que se investiguen, o cuando lo solicitare el interesado en los juicios en que sea parte el fisco nacional, provincial o municipal. Quienes divulguen o reprodujeren dichas informaciones, sean funcionarios, empleados, magistrados o terceros, incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.

ARTICULO 33: El secreto establecido en el artículo anterior no regirá:

1º) En el supuesto que, por desconocerse el domicilio del responsable, sea necesario recurrir a la notificación por edictos.

2º) Para los organismos recaudadores nacionales, provinciales o municipales, siempre que las informaciones respectivas estén directamente vinculadas con la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes de sus respectivas jurisdicciones.

3º) Respecto de personas, empresas o entidades a quienes la Dirección General encomiende la realización de tareas administrativas, relevamiento de estadísticas, computación, procesamiento de información, confección de padrones, gestión de percepción o cobro, y otras para el cumplimiento de sus fines. En estos casos, las personas, empresas o entidades referidas, sus dependientes y terceros que tengan acceso a la información estarán obligados a mantener el secreto en los términos y con los alcances del artículo anterior.

ARTICULO 34: Los funcionarios fiscales están obligados a acreditar su calidad de tales mediante una credencial oficial que los identifique cuya exhibición podrá ser exigida por los contribuyentes, responsables y terceros,

en oportunidad de la actuación de dichos funcionarios.

## TITULO II: SUJETOS PASIVOS

### CAPITULO I

#### Contribuyentes

ARTICULO 35: Están obligados al pago de los tributos en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de su deuda tributaria, los que sean contribuyentes según las normas de este Código y demás leyes especiales; sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil, sin perjuicio, con respecto a estos últimos, de la situación prevista en el artículo 39, inciso 4º.

ARTICULO 36: Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible o generador que, como causales del nacimiento de la obligación tributaria, les atribuyan las normas de este Código y demás leyes especiales:

1º) Las personas de existencia visible, capaces o incapaces según el Derecho Privado.

2º) Las personas jurídicas del Código Civil y las sociedades, asociaciones y entidades a las que el Derecho Privado reconoce la calidad de sujetos de derecho.

3º) Las sociedades, asociaciones, entidades y empresas que no tengan las calidades previstas en el inciso anterior, y aun los patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unos y otros sean considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible o generador de tributos.

4º) Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible o generador, en las condiciones previstas en este Código o en la ley respectiva.

ARTICULO 37: Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado nacional, provincial o municipal, así como las empresas estatales y mixtas, están sujetas a los tributos regidos por este Código, estando en consecuencia obligadas a su pago, salvo exención expresa.



## CAPITULO II

### Responsables por deuda ajena

ARTICULO 38: Están obligados al pago de los tributos, con los recursos que administran, perciben o disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos o que especialmente se fijan para tales responsables:

- 1º) El cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro.
- 2º) Los padres, tutores y curadores de los incapaces.
- 3º) Los síndicos y liquidadores de las quiebras y concursos, representantes de las sociedades en liquidación, los administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos.
- 4º) Los directores, gerentes y demás representantes o administradores de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 35, incisos 2º) y 3º).
- 5º) Los administradores de patrimonios, empresas o bienes que en ejercicio de sus funciones puedan determinar íntegramente la materia imponible que gravan las normas de este Código y demás leyes tributarias con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones, los mandatarios con facultad de percibir dinero.
- 6º) Los titulares, encargados y administradores de las reparticiones y empresas estatales o mixtas contempladas en el artículo 36.
- 7º) Los agentes de retención y percepción de tributos.

## CAPITULO III

### Solidaridad

ARTICULO 39: Están solidariamente obligados al pago del tributo aquellos contribuyentes respecto de los cuales se verifique un mismo hecho imponible o generador.

ARTICULO 40: Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:

- 1º) Todos los responsables enumerados en los primeros seis incisos del artículo 37 cuando, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios, no abonaren oportunamente el tributo debido, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria respecto a quienes demuestren debidamente que sus representados, mandantes,

etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente sus deberes fiscales, siempre que ello no pueda atribuirse a culpa propia del responsable.

2º) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior con carácter general, los síndicos de las quiebras y concursos que no hicieren las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la iniciación del proceso; en particular si, con anterioridad de quince días del vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito fiscal, no hubieran requerido de la Dirección General la constancia de las respectivas deudas tributarias.

3º) Los agentes de retención y percepción por el tributo que omitieran retener o percibir o que, retenido o percibido, dejaron de pagar, en la forma y término que establezcan las normas pertinentes, si no acreditaron que los contribuyentes han pagado el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria que para abonarlo existe a cargo de éstos desde el vencimiento del plazo concedido a dichos agentes.

4º) Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las normas tributarias consideran como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no hubieran cumplido la intimación administrativa de pago del tributo adeudado. La responsabilidad del adquirente en cuanto a la deuda fiscal no determinada caducará:

a) A los tres meses de efectuada la transferencia, si con antelación de quince días ésta hubiera sido denunciada a la Dirección General.

b) En cualquier momento en que la Dirección General reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relación al tributo que pudiera adeudarse, o en que acepte la garantía que éste ofrezca a ese efecto.

5º) Los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión, elusión u omisión del tributo.

6º) Los cedentes de créditos tributarios respecto de la deuda tributaria de sus cesionarios y hasta la concurrencia del importe aplicado a la cancelación de la misma, si se impugnara la existencia o legitimidad de tales créditos y los deudores no cumplieran la intimación administrativa de pago.

#### CAPITULO IV

##### Responsabilidad por hechos u omisiones de gestores y dependientes

ARTICULO 41: Los obligados y responsables de acuerdo con las disposiciones de este Código, lo son también por las consecuencias del hecho u omisión de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consiguientes.

## CAPITULO V

### Domicilio fiscal

ARTICULO 42: El domicilio fiscal de contribuyentes y responsables es el domicilio de origen, real, o en su caso, legal, legislado por el Código Civil. Los contribuyentes y responsables están obligados a declarar este domicilio y a consignarlo en sus declaraciones juradas, en los formularios de liquidación administrativa de tributos y en todo escrito presentado ante la Dirección General.

ARTICULO 43: Cuando los contribuyentes y responsables se domicilien fuera de la Provincia y no tengan representantes en la misma o no pueda establecerse el de estos últimos, se considerará como domicilio fiscal el del lugar de la Provincia en que tengan su principal negocio o explotación o la principal fuente de sus recursos, sus inmuebles o, subsidiariamente, el lugar de su última residencia en la Provincia.

ARTICULO 44: Podrá admitirse la constitución de domicilio especial, así como también su cambio, siempre y cuando ello no obstaculice la fiscalización, determinación y percepción de tributos. Se considerará aceptado el domicilio especial o, en su caso, su cambio, cuando la Dirección General no se opusiera dentro de los treinta días de haber sido notificada de dicha constitución o cambio. Los contribuyentes y responsables que soliciten prórrogas o facilidades de pago deberán constituir un domicilio especial a ese efecto dentro del perímetro de la localidad en que se encuentre la dependencia fiscal cuya jurisdicción le corresponda para tal acto.

ARTICULO 45: Cualquiera de los domicilios previstos en los tres artículos anteriores, y sin perjuicio de la obligación de constituir domicilio legal especial en juicio cuando correspondiere de acuerdo con las normas procesales, producirá en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido.

ARTICULO 46: Los contribuyentes y responsables están obligados a informar a la Dirección General cualquier cambio de domicilio dentro de los cinco días de efectuado. Sólo se admitirá el cambio del domicilio real cuando se haya producido el traslado efectivo del anterior; si se tratara de un domicilio legal, cuando éste hubiera desaparecido de acuerdo con lo previsto por el Código Civil.

## CAPITULO VI

### Deberes relativos a la verificación y fiscalización de tributos

ARTICULO 47: Los contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización, verificación e investigación que realice la Dirección General en cumplimiento de sus funciones, y en especial deberán:

1º) Cuando lo requieran las normas tributarias y sus reglamentaciones:

a) Llevar libros y registros especiales referentes a las actividades y operaciones que se vinculen con la tributación.

b) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y comunicarán oportunamente sus modificaciones.

c) Solicitar a la Dirección General o a la autoridad que corresponda permisos previos o de habilitación de locales.

d) Presentar las declaraciones e informaciones que correspondan.

2º) Conservar en forma ordenada, por un término de diez años, los libros de comercio, los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos gravados o que guarden vinculación directa con los mismos.

3º) Facilitar a los funcionarios fiscales autorizados las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, viviendas, buques, aeronaves y otros medios de transporte.

4º) Presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercaderías, etc., relacionados con hechos generadores de obligaciones tributarias, y realizar las ampliaciones o declaraciones que les fueren requeridas.

5º) Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria.

6º) Comunicar su domicilio fiscal, y cualquier otro lugar de domicilio, de residencia, local, depósito, etc., donde realice actividades directamente vinculadas con la tributación o tenga la guarda de bienes y documentos, y las modificaciones o cambios respectivos.

7º) Concurrir a las oficinas fiscales cuando sea regularmente citado.

ARTICULO 48: Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registraciones mediante sistemas de computación de datos deberán mantener en condiciones de operatividad los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con las operaciones o situaciones que constituyan hechos gravados o que guarden vinculación directa con los mismos por el término de dos años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado. Asimismo, y a requerimiento de la Dirección General, deberán:

1º) Poner a disposición de la misma copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos, debiendo suministrar la requirente los elementos materiales al efecto.

2º) Poner a disposición de la Dirección General información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y las aplicaciones implantadas, ya sea que el procedimiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.

3º) Poner a disposición de la Dirección General el uso de su equipamiento de computación para la realización de tareas de auditoría, cuando se hallaren bajo fiscalización.

ARTICULO 49: Los terceros ajenos a la relación tributaria están obligados a cooperar con la Dirección General en las funciones de fiscalización, verificación e investigación.

ARTICULO 50: Los organismos y entes estatales nacionales, provinciales y municipales, y los entes privados, incluidos bancos, bolsas y mercados, tienen la obligación de suministrar a la Dirección General todas las informaciones que se les soliciten, relativas a contribuyentes y responsables determinados, para facilitar la determinación, fiscalización y verificación de los tributos a su cargo y la investigación de los ilícitos tributarios respectivos.

ARTICULO 51: Los funcionarios públicos, incluidos jueces, funcionarios policiales y del Ministerio Público, están obligados a facilitar la colaboración que les requiera la Dirección General para el cumplimiento de sus funciones, y a denunciar ante ésta las infracciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 52: Las personas físicas y jurídicas y las sucesiones indivisas deberán declarar a la Dirección General los bienes inmuebles y muebles registrables de los que sean titulares de dominio, así como sus transferencias y constitución de gravámenes reales. El Poder Ejecutivo determinará reglamentariamente la oportunidad y las modalidades del cumplimiento de esta obligación.

ARTICULO 53: Ninguna oficina pública tomará razón de actuación o tramitación alguna con respecto a negocios, bienes o actos relacionados con obligaciones fiscales cuyo cumplimiento no se pruebe con certificado expedido por la Dirección General. Los escribanos autorizantes deberán asegurar el pago de dichas obligaciones, actuando a tales efectos como agentes de percepción o retención.

### TITULO III

#### OBJETO Y DETERMINACION DEL TRIBUTO

##### CAPITULO I

##### Hecho y materia imponible

ARTICULO 54: Sin perjuicio de lo que se determina en especial en el Libro Segundo del presente Código, y con carácter general, el hecho imponible o generador de la obligación tributaria se considera realizado, a todos sus efectos:

1º) Cuando la norma tributaria atiende preferentemente a sus aspectos fácticos o económicos, desde el momento en que se hayan cumplido las circunstancias materiales o temporales necesarias para que se produzcan los efectos que le corresponden según el curso natural y ordinario de las cosas.

2º) Cuando la norma tributaria atiende preferentemente a sus aspectos jurídicos, desde el momento en que los actos, situaciones o relaciones jurídicas estén constituidas de conformidad con el Derecho aplicable.

ARTICULO 55: La norma tributaria puede independizar el momento del nacimiento de la obligación tributaria del momento de la consumación del hecho imponible o generador, incluso anticipando el primero respecto del segundo, cuando, estando en curso el acto, hecho, situación o relación tipificado, resulte previsible su consumación según el curso natural y ordinario de las cosas y pueda cuantificarse la materia imponible respectiva. En tal caso, la materia determinada y el tributo liquidado tendrán carácter definitivo.

ARTICULO 56: Cuando la determinación legal del hecho imponible o generador de la obligación tributaria atienda preferentemente a sus aspectos fácticos o económicos, para la determinación de la verdadera naturaleza jurídica y fiscal de los actos, hechos, situaciones y relaciones de contribuyentes y responsables, se tendrá en cuenta principalmente su efectiva naturaleza económica. Cuando los contribuyentes o responsables sometan dichos actos, hechos, situaciones o relaciones a formas, estructuras o tipos jurídicos que no sean manifiestamente los que el Derecho Privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente su efectiva intención económica, se prescindirá, en la consideración del hecho imponible o generador real, de las formas, estructuras o tipos jurídicos inadecuados, y se considerará el acto, hecho, situación o relación económica real como encuadrada en las formas, estructuras o tipos jurídicos que el Derecho Privado les aplicaría con independencia de los escogidos por los contribuyentes o responsables o les permitiría aplicar como los más adecuados a la intención real de los mismos.

ARTICULO 57: La base imponible es la cuantificación del hecho imponible o generador expresada en moneda nacional y es la base de cálculo para la liquidación del tributo. Salvo disposición legal en contrario, dicha cuantificación debe fundarse en la realidad económica, en los usos normales y ordinarios de los negocios y en las normas y reglas contables admitidas. La base imponible debe ser proporcionada al hecho imponible o generador y ambos a la capacidad contributiva del contribuyente.

## CAPITULO II

### Determinación del tributo

ARTICULO 58: La determinación de la materia imponible, de los quebrantos fiscales y de la cuantía de la obligación tributaria se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que los contribuyentes y demás responsables presenten a la Dirección General, o en base a datos que ésta posea y que utilice para efectuar la liquidación administrativa, según lo establecido con carácter general para el tributo de que se trate. Tanto la declaración jurada, como la información exigida para la liquidación administrativa de los gravámenes, debe contener todos los elementos y datos necesarios para la determinación y liquidación.

ARTICULO 59: El importe del tributo que deben abonar los contribuyentes o responsables al vencimiento del plazo general establecido, será el que resulte de deducir del total del gravamen correspondiente al período fiscal que se declare o liquide las cantidades pagadas a cuenta del mismo de conformidad con lo reglado por el Título VI de este Libro Primero, consignados en la declaración jurada u oportunamente denunciados en caso de liquidación administrativa. También serán deducibles los saldos a favor ya acreditados por la Dirección General o que el propio contribuyente o responsable hubiera consignado en declaraciones juradas anteriores en cuanto éstas no hayan sido impugnadas. Sin la conformidad de la Dirección General no podrán deducirse otras cantidades que la provenientes de los conceptos indicados.

ARTICULO 60: Además de los casos de autodeterminación del tributo por contribuyentes y responsables, tienen también carácter de declaración jurada:

1º) La información exigida para las hipótesis de liquidación administrativa.

2º) Las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por contribuyentes y responsables con datos que los mismos aporten.

3º) Las informaciones presentadas por contribuyentes y responsables con ocasión de solicitudes de prórroga, beneficios fiscales o reconocimiento de

exenciones, acogimiento a regímenes de presentación espontánea, moratorias, regularizaciones fiscales, etc.

4º) Las informaciones presentadas por contribuyentes y responsables relativas a domicilio fiscal y, en general, toda información presentada por los mismos a la Dirección General, de las que surjan datos o elementos relativos a la determinación de su situación tributaria.

ARTICULO 61: La declaración jurada o la liquidación que efectúe la Dirección General sobre la base de los datos aportados por el contribuyente o responsable, están sujetas a verificación administrativa y, en su caso, a impugnación.

ARTICULO 62: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la declaración jurada hace responsable al declarante por el tributo que en ella se base o de ella resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores sino por la vía de la repetición, salvo el caso de errores de cálculo cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad.

### CAPITULO III

#### Exenciones y otros beneficios fiscales

ARTICULO 63: Las exenciones tributarias tienen como efecto la dispensa de la obligación fiscal de aquellos contribuyentes y responsables respecto de los cuales se hubiera verificado el hecho imponible o generador. Salvo disposición legal en contrario, las exenciones, sean subjetivas u objetivas, no dispensan a contribuyentes y responsables de las obligaciones fiscales accesorias o derivadas de los tributos, tales como el deber de presentar declaraciones juradas, declarar el domicilio, las vinculadas con las facultades fiscales de verificación y fiscalización, etc.

ARTICULO 64: En los supuestos de solidaridad objetiva previstos por el artículo 38, la exención subjetiva de una de las partes no beneficia a las demás. En tales casos la exención sólo podrá ser efectiva respecto del sujeto beneficiado cuando la ley del gravamen o su reglamentación permitan discriminar el impuesto exento; cuando dicha discriminación no esté contemplada o autorizada por las normas del gravamen, la exención sólo podrá hacerse valer por la vía de la repetición, y siempre que pueda determinarse con precisión la medida de la participación del sujeto exento en la realización del hecho imponible o generador común y en la carga del tributo.



ARTICULO 65: Las exenciones objetivas no serán efectivas cuando los actos, hechos, situaciones o relaciones exentas se realizaren conjunta y complementariamente con actos, hechos, situaciones o relaciones gravados y no exentos.

ARTICULO 66: Un mismo sujeto no podrá acogerse a más de un régimen de promoción económica en la medida en que puedan coexistir en su beneficio dos o más regímenes de franquicias tributarias. A los efectos tributarios previstos por el presente artículo se entiende que un conjunto económico, aunque incluya estructural u operativamente a varios sujetos jurídicos según el Derecho Privado, constituye un único sujeto impositivo.

ARTICULO 67: Los beneficios o franquicias tributarias concedidos por las leyes fiscales, de promoción económica, o de cualquier otra naturaleza, que dependan, según la norma que los instituye, de la existencia o realización de actos, hechos, situaciones o relaciones determinados, se entienden concedidos bajo condición, suspensiva o resolutoria según los casos.

TITULO IV

EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

CAPITULO I

Pago

ARTICULO 68: El pago de los tributos debe ser realizado por los contribuyentes o responsables. Cuando el monto de la obligación esté determinado o liquidado de acuerdo con las prescripciones de este Código y de las demás normas tributarias aplicables, también pueden realizar el pago los terceros extraños a la obligación fiscal, subrogándose sólo en cuanto al derecho de crédito y a las garantías, preferencias y privilegios sustanciales.

ARTICULO 69: La ley, la reglamentación o, en su defecto, la Dirección General, establecerán los vencimientos de los plazos generales tanto para el pago de los tributos como para la presentación de declaraciones juradas y toda otra documentación necesaria para la determinación o liquidación de los mismos.

ARTICULO 70: El pago de los tributos determinados o liquidados por la Dirección General deberá ser efectuado dentro de los quince días de notificada la determinación o liquidación respectiva.

ARTICULO 71: La Dirección General podrá conceder prórrogas, de hasta veinticuatro meses como máximo, en casos especiales, con garantía o sin ella, a solicitud de los contribuyentes y responsables. Las solicitudes de prórroga deberán solicitarse antes del vencimiento del plazo general para el pago y sólo podrán ser concedidas cuando a juicio de la Dirección General se justifiquen las causas que impiden el cumplimiento normal de la obligación. La decisión denegatoria será irrecurrible. La Dirección General deberá reglamentar con carácter general el ejercicio de esta facultad.

ARTICULO 72: Cuando este Código o las leyes especiales, atendiendo a la naturaleza del tributo y del hecho imponible o generador establezca la percepción o retención en la fuente de la obligación tributaria, la percepción o retención efectuada por los agentes respectivos tendrá para el contribuyente el carácter de pago, con todos sus efectos cancelatorios, en la medida de la percepción o retención sufrida, sin perjuicio de la obligación, por parte de dichos agentes, de ingresar en los plazos establecidos las sumas aludidas.

ARTICULO 73: Salvo disposición contraria expresa de este Código y leyes fiscales especiales, el pago de los tributos, intereses, multas, anticipos y demás pagos a cuenta, debe hacerse mediante depósito bancario o con cheque, giro, valor postal o bancario sobre San Juan y a la orden de la Dirección General de Rentas. Para ese fin ésta abrirá cuentas en los bancos cuando lo juzgue conveniente para facilitar la recaudación de los gravámenes; podrá asimismo habilitar oficinas especiales al efecto.

Se considerará como fecha de pago la del día en que se efectúe el depósito, se tome el giro postal o bancario, o se reciba cheque en la Dirección General, siempre que esos valores puedan hacerse efectivos en el momento de su presentación al cobro, o se inutilice el papel sellado o valores fiscales.

La Dirección General está facultada para dictar normas reglamentarias complementarias en esta materia, y en especial para establecer y modificar los lugares y modalidades de pago en las localidades del interior de la provincia o del exterior de la misma.

ARTICULO 74: Sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del artículo anterior, el pago del tributo debe hacerse en el lugar del domicilio del responsable residente en la provincia o en el de su representante en casos de ausencia. El pago del tributo percibido o retenido por los agentes respectivos deberá hacerse en el lugar del domicilio de los mismos. Cuando el domicilio del contribuyente o responsable no se conociese o no pudiera determinarse, o no se conociese el del representante en caso de ausencia de aquéllos, la Dirección General fijará el lugar de pago.

ARTICULO 75: Los contribuyentes y responsables determinarán, al efectuar el pago, a qué deuda debe imputarse. Cuando así no lo hicieren, o la imputación fuere defectuosa, y las circunstancias especiales del caso no permitieren establecer la deuda a que se refieren, la Dirección General determinará a cuál de las obligaciones no prescriptas deberá imputarse el pago. En los casos de prórrogas por obligaciones que abarquen más de un ejercicio, los ingresos, en la parte en que corresponda a tributos, se imputarán a la deuda más antigua.

## CAPITULO II

### Compensación

ARTICULO 76: Se compensarán de oficio o a petición de parte los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributo y sus accesorios, con las deudas tributarias liquidadas por aquél y no observadas, o

con las liquidadas administrativamente, referentes a períodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y aunque provengan de distintos tributos regidos por este Código. También son compensables multas firmes y sus accesorios con tributos y sus accesorios y viceversa.

ARTICULO 77: Cuando la Dirección General determine o liquide nuevas obligaciones, el contribuyente podrá compensarlas con créditos que tenga correspondientes a los mismos períodos fiscales, no invocados con anterioridad, aunque estuvieran prescriptos. Igual derecho tendrá la Dirección General en las situaciones análogas producidas a raíz de reclamaciones del contribuyente.

ARTICULO 78: Los agentes de percepción y retención podrán compensar, previa autorización de la Dirección General, lo ingresado en exceso por error en percepciones o retenciones efectuadas respecto de un mismo tributo a los mismos contribuyentes o responsables, en operaciones posteriores.

ARTICULO 79: Los créditos líquidos y exigibles del contribuyente por concepto de tributos pueden ser cedidos a otros contribuyentes y responsables al solo efecto de ser compensados con deudas tributarias que tuviere el cesionario frente a la Dirección General. Ésta no está obligada a aceptar estas cesiones y su aceptación no implica asumir responsabilidad alguna derivada del hecho de la transferencia, la que en todos los casos corresponde exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos.

ARTICULO 80: Cuando la Dirección General compruebe la existencia de saldos líquidos y exigibles a favor de los contribuyentes, originados en pagos o ingresos en exceso o en compensaciones autorizadas, podrá, de oficio o a solicitud del interesado, acreditar el remanente respectivo o devolver lo pagado de más, en forma simple y rápida, a cargo de las cuentas recaudadoras.

ARTICULO 81: Todas las compensaciones, cesiones, acreditaciones y devoluciones relativas a créditos y deudas tributarias sujetos a verificación, son precarias y están sujetas a la condición de que dichos créditos o deudas no sean impugnables o impugnados.

### CAPITULO III

#### Transacción

ARTICULO 82: La transacción sólo es admisible en cuanto a la

determinación de los hechos y no respecto del significado de la norma aplicable o al monto del tributo, multa y sus accesorios. El consentimiento de la Dirección General debe ser expresado por escrito por el Director General o el funcionario que lo reemplace.

ARTICULO 83: Facúltase al Poder Ejecutivo para hacer arreglos con el fin de asegurar la cancelación de deudas tributarias pendientes. Esta facultad sólo comprende los actos jurídicos que consolidan o perfeccionan el crédito fiscal sin afectar su integridad e indisponibilidad.

#### CAPITULO IV

##### Confusión

ARTICULO 84: La extinción de la obligación tributaria y sus accesorios por confusión se rige por las normas pertinentes del Código Civil.

#### CAPITULO V

##### Condonación o Remisión

ARTICULO 85: La obligación de pago de los tributos, multas e intereses resarcitorios sólo puede ser condonada o remitida por ley dictada con alcance general.

ARTICULO 86: El Poder Ejecutivo queda facultado para disponer por el término que considere conveniente, con carácter general o para determinadas zonas o radios, la condonación o remisión total o parcial de multas, intereses moratorios y punitivos, y cualquier otra sanción por infracciones fiscales, excepto delitos, relacionadas con todos o cualesquiera de los tributos regidos por este Código, a los contribuyentes y responsables que regularicen espontáneamente su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando, en su caso, la posesión o tenencia de efectos en contravención.

## CAPITULO VI

### Prescripción

ARTICULO 87: Las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de de las obligaciones fiscales regidas por este Código, y para aplicar y hacer efectivas las multas por contravenciones tributarias materiales previstas en el mismo, prescriben:

1º) Por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes y responsables inscriptos, así como en el caso de contribuyentes y responsables no inscriptos que no tengan obligación legal de inscribirse ante la Dirección General o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación.

2º) Por el transcurso de diez años en el caso de contribuyentes y responsables no inscriptos.

ARTICULO 88: Las acciones y poderes fiscales para aplicar y hacer efectivas multas y clausuras por contravenciones tributarias formales prescriben por el transcurso de un año.

ARTICULO 89: La acción de repetición de tributos, pagos a cuenta e intereses prescribe por el transcurso de cinco años.

ARTICULO 90: El término de la prescripción comenzará a correr:

1º) Respeto de las acciones y poderes fiscales para determinar el tributo y sus accesorios, y aplicar multas por contravenciones tributarias materiales, desde el 1º de enero siguiente al vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas o para el pago del gravamen, el que fuere anterior.

2º) Respecto de las acciones de cobro de los tributos, pagos a cuenta y sus accesorios determinados o liquidados, y de las multas, desde la fecha en que hayan quedado firmes unos y otras.

3º) Respecto de las acciones y poderes para aplicar multas y clausuras por contravenciones tributarias formales, desde la fecha en que se hubiere cometido la infracción o, si ésta fuera continua, en que cesó de cometerse.

4º) Respecto de la acción de repetición de tributos y sus accesorios, desde el 1º de enero siguiente al año de cada pago o ingreso, en forma independiente para cada uno de ellos.

5º) Respecto de la acción de repetición de pagos a cuenta de los tributos y sus accesorios, desde el 1º de enero siguiente al año en que venció el período fiscal del tributo respectivo.

ARTICULO 91: El curso de la prescripción de la acción de cobro de tributos liquidados o determinados, sus pagos a cuenta, las multas firmes y

los intereses respectivos, se suspenderá por un año, y por una sola vez, desde la fecha de la intimación administrativa de pago.

ARTICULO 92: Respecto de la prescripción de la acción de repetición, en el caso de incapaces que carecieren de representantes legales, rigen las disposiciones de los artículos 3966 y 3980 del Código Civil.

ARTICULO 93: La prescripción de las acciones y poderes del fisco para determinar, liquidar y exigir el pago del tributo se interrumpirá:

- 1º) Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria.
- 2º) Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.
- 3º) Por el ejercicio de la acción administrativa de determinación de oficio o, en su caso, de la acción judicial de cobro. Esta interrupción se tendrá por no sucedida si la instancia administrativa, o en su caso la judicial, caducare, o si la Dirección General desistiere de la acción, o si el contribuyente o responsable resultare absuelto definitivamente de la obligación pretendida.

ARTICULO 94: La prescripción de la acción para aplicar sanciones o para hacerlas efectivas se interrumpirá:

- 1º) Por la comisión de nuevas infracciones.
- 2º) Por el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales respectivas, con la misma salvedad prevista en el inciso 3º) del artículo anterior.

ARTICULO 95: En los casos de los incisos 1º) y 2º) del artículo 93, y 1º) del artículo 94, el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que ocurran las circunstancias indicadas en ellos como causales de interrupción.

ARTICULO 96: La prescripción de la acción de repetición se interrumpirá:

- 1º) Por la deducción del reclamo administrativo ante la Dirección General, cuando el mismo fuere formalmente procedente. En este caso, el nuevo término de la prescripción comenzará a correr a partir del 1º de enero siguiente al año en que se cumplieren los tres meses de presentado el reclamo.
- 2º) Por la deducción de la acción ante el Tribunal Fiscal o ante el juez competente, cuando la misma fuere formalmente procedente. Esta interrupción se tendrá por no sucedida si el interesado desistiere de la acción, o si se verificara la caducidad de la instancia.

ARTICULO 97: El hecho de haber prescripto la acción para determinar o exigir el pago del tributo no tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar sanciones por infracciones susceptibles de cometerse con posterioridad

al vencimiento de los plazos generales para la presentación de la declaración jurada o para el pago de los gravámenes.

ARTICULO 98: En los casos de solidaridad previstos en este Código, la interrupción de la prescripción tendrá los efectos establecidos por el artículo 3994 del Código Civil.



TITULO V

INTERESES

CAPITULO I

Intereses resarcitorios

ARTICULO 99: La falta de pago total o parcial de las obligaciones tributarias al momento de su vencimiento generará a partir de esa fecha, objetivamente y sin necesidad de interpelación alguna, y siempre que el retardo no sea imputable al contribuyente o responsable a título de mora, un interés resarcitorio equivalente, al momento de su fijación, al interés corriente en plaza para el descuento bancario de documentos comerciales, el que se devengará hasta la extinción de la obligación o, en su caso, el inicio del juicio respectivo. Están comprendidos en los supuestos de este artículo las multas líquidas y exigibles, los pagos a cuenta y los casos de prórrogas acordadas y diferimientos concedidos en virtud de regímenes preferenciales o promocionales.

ARTICULO 100: El mismo interés devengará el cobro indebido o en exceso de tributos, pagos a cuenta e intereses por parte del fisco desde el momento de la reclamación administrativa deducida por el contribuyente o responsable y hasta la cancelación del del crédito o, en su caso, el inicio del juicio respectivo.

ARTICULO 101: La obligación de abonar los intereses resarcitorios subsiste para el deudor aunque el acreedor no formule reserva alguna al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el cobro de aquélla.

ARTICULO 102: Anualmente el Poder Ejecutivo fijará la tasa de interés que regirá en el año calendario siguiente o hasta que sea sustituida por otra.

CAPITULO II

Intereses moratorios

ARTICULO 103: Cuando la falta de pago total o parcial de los tributos y

pagos a cuenta fuera imputable a los contribuyentes o responsables a título de mora, se devengará desde el momento del vencimiento general o particular de la obligación, sin necesidad de interpelación alguna, un interés equivalente al fijado de acuerdo con los artículos 99 y 102, incrementado en un cincuenta por ciento, el que se liquidará hasta la extinción de la obligación o, en su caso, el inicio del juicio respectivo, rigiendo al respecto la previsión del artículo 101. El interés moratorio se adeudará independientemente de las otras sanciones que pudieren corresponder por aplicación del presente Código.

ARTICULO 104: Para eximirse de las responsabilidades derivadas de la mora, el contribuyente o responsable debe acreditar que la falta de pago total o parcial, o la demora del ingreso, no le es imputable. Sólo se admitirán como causales de excusación la fuerza mayor, el caso fortuito y la culpa de la administración.

ARTICULO 105: En los casos de prórrogas acordadas y diferimientos de tributos, el incumplimiento de las condiciones establecidas para la concesión de dichos beneficios tendrá como consecuencia, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder, el devengamiento de los intereses moratorios desde el vencimiento general de los tributos y pagos a cuenta respectivos.

### CAPITULO III

#### Intereses punitorios

ARTICULO 106: Cuando la Dirección General deba recurrir a la acción judicial para cobrar los tributos, sus pagos a cuenta, las multas firmes y los intereses respectivos, la suma total de lo adeudado por los contribuyentes y responsables, incluyendo capital e intereses resarcitorios o moratorios, devengará desde el momento del juicio hasta su cancelación definitiva un interés punitorio equivalente al doble del interés fijado de acuerdo con los artículos 99 y 102.

El mismo interés devengarán las obligaciones tributarias, con excepción de las multas, cuando los contribuyentes o responsables interpusieren recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, desde el momento de la interposición del recurso hasta su cancelación definitiva.

ARTICULO 107: Al momento de la sentencia el juez o el vocal del Tribunal Fiscal podrá, atendiendo a las circunstancias del caso, reducir el interés previsto en el artículo anterior hasta en un cincuenta por ciento, si estimare que el contribuyente o responsable tenía razones fundadas para litigar. Cuando, por el contrario, juzgase que la conducta procesal del contribuyente o responsable fue maliciosa o temeraria, podrá aumentar dicho interés hasta en

un cien por ciento. La sentencia deberá pronunciarse expresamente sobre la cuantía de este interés.

ARTICULO 108: Cuando el contribuyente o responsable deba recurrir al Tribunal Fiscal o a la acción judicial para obtener la repetición de tributos, pagos a cuenta e intereses pagados indebidamente o en exceso, la suma total de lo reclamado, incluyendo capital e intereses, devengará desde el momento de la notificación de la acción respectiva hasta su cancelación definitiva el mismo interés previsto en el artículo 106, rigiendo asimismo análogas alternativas que las establecidas en el artículo anterior.

TITULO VI

PAGOS A CUENTA

CAPITULO I

Anticipos

ARTICULO 109: La Dirección General podrá exigir, hasta el vencimiento del plazo general, el pago de sumas de dinero a cuenta del tributo que se deba abonar al término de aquél. Estos anticipos podrán ser fijados proporcionalmente a la fracción transcurrida del período fiscal y sobre la base del tributo correspondiente al período inmediato anterior, o tomando otros datos como base de cálculo tales como ingresos, capitales, ventas, importes de suministros o inversiones, o, en general, otros indicios de capacidad contributiva actual.

ARTICULO 110: El Poder Ejecutivo o, en su defecto, la Dirección General, reglamentarán para cada tributo el régimen de anticipos que se autorizan por el artículo anterior. En todo los casos se facultará al contribuyente o responsable a corregir o adecuar el monto de cada anticipo a su capacidad contributiva actual o prevista para el ejercicio fiscal en curso. Esta opción sólo podrá ser ejercida, bajo las formas y modalidades que establezca la reglamentación, antes del vencimiento general de cada anticipo.

ARTICULO 111: Vencido el plazo general de pago de cada tributo, la Dirección General no podrá reclamar el ingreso de los anticipos impagos, salvo que antes de esa fecha hubiera iniciado la acción judicial de cobro, pero sí sus intereses cuando la obligación hubiera sido establecida con carácter general con fecha anterior al vencimiento general del tributo.

ARTICULO 112: Cuando del ejercicio de la opción conferida al contribuyente o responsable por el artículo 110 resultare al final del ejercicio fiscal o al vencimiento general del tributo que el anticipo así liquidado era inferior al que hubiera correspondido por aplicación del régimen general y de acuerdo con la capacidad contributiva real manifestada, el contribuyente o responsable deberá pagar a la Dirección General los intereses moratorios correspondientes a la diferencia resultante.

## CAPITULO II

### Retenciones y percepciones a cuenta del tributo

ARTICULO 113: Cuando este Código o las leyes tributarias especiales establezcan la percepción de los tributos en la fuente, el Poder Ejecutivo o, en su defecto, la Dirección General, dispondrán qué sujetos y en qué casos intervendrán como agentes de retención o de percepción.

ARTICULO 114: Cuando este Código o las leyes tributarias especiales no establezcan de acuerdo con lo previsto en el artículo 55 que las retenciones o percepciones tengan carácter de pago definitivo del gravamen, las mismas constituirán pagos a cuenta del tributo que en definitiva corresponda. En tales casos la reglamentación deberá instituir un régimen opcional con finalidades y efectos análogos establecidos en los artículos 110 y 112.

## CAPITULO III

### Pago a cuenta del tributo adeudado

ARTICULO 115: Cuando los contribuyentes, estando obligados a hacerlo, no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales, y la Dirección General conozca por declaraciones o determinaciones firmes la medida en que les ha correspondido tributar gravamen en períodos anteriores, los emplazará por el término de quince días para que presenten las declaraciones juradas omitidas e ingresen el tributo correspondiente. Si dentro de dicho plazo los responsables no cumplen con la intimación, la Dirección General, sin más trámite, podrá requerirles judicialmente el pago, a cuenta del tributo que en definitiva les corresponda abonar, de una suma equivalente a tantas veces el tributo declarado o determinado respecto a cualquiera de los períodos no prescriptos, cuantos sean los períodos por los cuales dejaron de presentar declaraciones, con más sus intereses moratorios respectivos.

La suma indicada en el párrafo anterior se actualizará desde las fecha en que el tributo tomado como base de cálculo haya sido declarado o determinado hasta el 1º de abril de 1991, aplicando las normas fiscales de actualización vigentes a esa fecha.

ARTICULO 116: Iniciada la acción judicial por el pago a cuenta del tributo adeudado, la misma no será enervada por las presentación extemporánea de la declaración jurada omitida. Las reclamaciones fundadas en la presentación extemporánea de la declaración jurada tramitarán por la vía de la repetición, previo pago de las costas y gastos del juicio e intereses respectivos; este pago tendrá carácter definitivo.

## TITULO VII

### CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS

#### CAPITULO I

##### Normas y principios generales

ARTICULO 117: Los principios y disposiciones generales contenidos en el Libro Primero del Código Penal son aplicables a las contravenciones legisladas en el presente Código y las demás leyes tributarias especiales regidas por el mismo, en tanto no sean modificados expresamente o no resulten incompatibles con la naturaleza tributaria de dichas infracciones.

ARTICULO 118: Las sanciones previstas en este Título son independientes de los intereses regulados por el Título V del presente Libro, de las penas que pudieren corresponder por aplicación del Código Penal y el Código y legislación aduanera, y de cualquier otra sanción penal o contravencional contemplada en la legislación nacional, incluida la Ley Nº 23.771, provincial o municipal.

ARTICULO 119: La multa es la pena principal con la que se reprimen en este Código las contravenciones tributarias. Pueden constituir penas accesorias la inhabilitación especial, el decomiso de los instrumentos y efectos en infracción y la clausura de los locales donde la misma se hubiera cometido. En ningún caso la multa es convertible en penas privativas de la libertad.

ARTICULO 120: Cuando las multas deban aplicarse en función de la cuantía del tributo, ésta se corregirá, a los efectos de servir de base de cálculo de aquéllas, sumándole al monto originario del tributo el cálculo de los intereses resarcitorios devengados desde el momento del vencimiento general hasta el momento en que se dice la resolución o sentencia condenatoria definitiva.

ARTICULO 121: Salvo disposición legal en contrario, todos los sujetos comprendidos como contribuyentes o responsables de la obligación tributaria por los artículos 35, 36, 37 y 38 son también responsables y están sujetos a las sanciones establecidas en este Título, por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su caso, les sean imputadas por el hecho u omisión en que incurran sus representantes, directores, gerentes, administradores o mandatarios, o con relación a unos y otros, por el hecho u omisión de quienes

les están subordinados como sus agentes, factores o dependientes.

ARTICULO 122: Están asimismo alcanzados por las responsabilidades y penalidades establecidas en este Título los terceros que participen como coautores o cómplices de las infracciones tipificadas en el mismo, o que de cualquier modo faciliten las comisiones u omisiones incriminadas.

ARTICULO 123: Respecto de la aplicación y cumplimiento de las multas rigen las reglas de solidaridad previstas por los artículos 39 y 40.

ARTICULO 124: No están sujetas a las sanciones establecidas en este Título las sucesiones indivisas, sin perjuicio de la responsabilidad penal contravencional en que incurran sus administradores. Tampoco serán imputables el cónyuge cuyos réditos perciba o disponga en su totalidad el otro, los incapaces, los penados a que se refiere el art. 12 del Código Penal, los concursados o quebrados cuando la infracción sea posterior a la pérdida de la administración de sus bienes y siempre que no sean responsables con motivo de actividades cuya gestión ejerzan, sin perjuicio de las responsabilidades respectivas de sus administradores, cónyuges, padres, tutores, curadores, representantes, síndicos, etc.

ARTICULO 125: Para que exista responsabilidad penal es suficiente la atribución de la misma a título de culpa al sujeto imputado.

ARTICULO 126: Las sanciones previstas en este Título no serán de aplicación en los casos en que ocurra el fallecimiento del infractor respecto de sus herederos no responsables.

ARTICULO 127: Las sanciones relativas a contravenciones formales y a contravenciones materiales son independientes entre sí.

ARTICULO 128: El juez administrativo podrá eximir de sanción al responsable cuando se tratare de la primera infracción y la misma no revistiere gravedad.

## CAPITULO II

### Contravenciones formales

ARTICULO 129: Los contribuyentes, responsables y terceros que infringieren las disposiciones de este Código, de las leyes tributarias respectivas sujetas a su régimen, o de las reglamentaciones dictadas en su consecuencia, serán reprimidos con multa de DOSCIENTOS A DOS MIL PESOS.

ARTICULO 130: Serán reprimidos con multa de CUATROCIENTOS a TRES MIL PESOS los contribuyentes, responsables o terceros que incurran en alguno de los hechos u omisiones siguientes:

1º) No dieren cumplimiento en forma reiterada a los requerimientos legítimos que le formule la Dirección General.

2º) Quienes, estando obligados a inscribirse ante la Dirección General, no dieren cumplimiento al requerimiento que en este sentido le formule la Dirección General.

3º) No emitieren facturas o comprobantes de sus ventas, locaciones o prestaciones de servicios en la forma y condiciones determinadas por la Dirección General; o no conservaren sus duplicados o constancias de emisión.

4º) Se hallaren en la posesión o tenencia de bienes, mercaderías o documentos sobre cuya adquisición u origen no aportaren facturas o comprobantes emitidos en las mismas formas y condiciones del inciso anterior, o, en general, no pudieren justificar dicha posesión o tenencia.

5º) No llevaren anotaciones o registraciones de bienes o servicios, o de sus ventas, locaciones o prestaciones, o que llevadas, no reúnan los requisitos de oportunidad, orden y respaldo que exija la reglamentación.

ARTICULO 131: Serán reprimidos con multa de DOS MIL a VEINTE MIL PESOS y, en su caso, el decomiso de los bienes y mercaderías en infracción y la clausura de los locales respectivos, los comerciantes, industriales, productores agropecuarios o extractores de materias primas que incurrieren en alguno de los hechos u omisiones siguientes:

1º) Realizaren sus operaciones en locales clandestinos o no declarados o denunciados a la Dirección General, cuando tuvieren obligación de declararlos o denunciarlos.

2º) Poseyeren o utilizaren instalaciones clandestinas o no declaradas o denunciadas a la Dirección General, cuando tuvieren obligación de declararlas o denunciarlas.

3º) Se hallaren en posesión de bienes o mercaderías cuyo origen, título de posesión o tenencia no pudieren justificar.

ARTICULO 132: Los profesionales que en el ejercicio de su profesión fueren responsables, como autores, coautores o cómplices, de las infracciones previstas en el artículo anterior, y sin perjuicio de la solidaridad



establecida por el artículo 123, sufrirán la pena accesoria de inhabilitación especial de un mes a un año del ejercicio de la profesión.

ARTICULO 133: La clausura prevista por el artículo 131 se prolongará hasta tanto el responsable regularice la situación haciendo cesar la infracción.

### CAPITULO III

#### Contravenciones materiales

ARTICULO 134: El que mediante declaraciones juradas o informaciones inexactas, omitiere pagar, retener o percibir tributos, será sancionado con multa de un medio a dos veces el tributo omitido, no retenido o no percibido oportunamente. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o de percepción que omitan retener o percibir tributos estando obligados a ello.

ARTICULO 135: Será sancionado con multa de dos a veinte veces el importe del tributo omitido, evadido, eludido, no retenido o no percibido oportunamente, el que omitiere, evadiere, eludiere, no retuviere o no percibiere oportunamente tributos, mediante alguno de los siguientes actos, hechos u omisiones:

1º) No estar inscripto en el tributo respectivo ante la Dirección General, siendo ello debido, u omitir presentar sus declaraciones juradas, cuando de las características del caso, tales como la naturaleza o volumen de las operaciones realizadas, el capital invertido, la cuantía de los beneficios obtenidos o la índole de las relaciones jurídicas y económicas de los hechos, actos, situaciones o relaciones con incidencia directa sobre la determinación de los tributos, resulte que el contribuyente o responsable no podía razonablemente ignorar su calidad de tal y la existencia de las obligaciones emergentes de esa condición.

2º) Contradicción grave y evidente entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o informaciones administrativas, o con la realidad verificada por la Dirección General.

3º) La existencia de dos o más sistemas de libros, registraciones o respaldo documental, manifiestamente discordantes entre sí.

4º) La existencia de errores o falsedades graves y evidentes en las declaraciones juradas o informaciones administrativas que tengan incidencia directa en la determinación de la situación tributaria del contribuyente o responsable.

5º) La existencia de errores o falsedades graves en las respuesta a los requerimientos o interrogatorios que le formule la Dirección General.

6º) No llevar o exhibir libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficiente, siendo ello debido por aplicación de este Código y

sus reglamentaciones, y conforme con los usos comerciales, industriales o empresariales prudentes u honestos.

7º) Existencia en las declaraciones juradas o en los elementos documentales que deban servirles de base de inexactitudes graves, manifiestas e injustificables respecto a la aplicación de las normas legales y reglamentarias aplicables al caso.

8º) La conformación, declaración o uso de formas, estructuras o tipos jurídicos del Derecho Privado manifiestamente inadecuados para configurar los actos, hechos, situaciones y relaciones en su efectiva significación económica y tributaria.

ARTICULO 136: Serán sancionados con multa de dos a veinte veces el tributo retenido o percibido los agentes de retención o percepción que no ingresaren el mismo al fisco en el término establecido para ello.

ARTICULO 137: El que intentare o procurare omitir, evadir o eludir el pago de tributos propios o ajenos, provocando o intentando provocar la insolvencia patrimonial propia o ajena, o sacando fuera de la jurisdicción de la provincia fondos o bienes, será sancionado con multa de dos a veinte veces el tributo respectivo.

ARTICULO 138: Los profesionales que en el ejercicio de su profesión fueran responsables, como autores, coautores o cómplices, de las infracciones previstas en los tres artículos anteriores, y sin perjuicio de la solidaridad establecida por el artículo 123, sufrirán la pena accesoria de inhabilitación especial de seis meses a dos años del ejercicio de la profesión.

## TITULO VIII

### PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS ADMINISTRATIVOS

#### CAPITULO I

##### Normas generales

ARTICULO 139: La Dirección General actuará de oficio o a petición de parte interesada. No estará obligada a considerar las denuncias que le formulen terceros, excepto cuando las mismas fueren hechas por autoridades nacionales, provinciales o municipales competentes en el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 140: El procedimiento tributario debe procurar establecer la verdad material y objetiva de los hechos y conductas. Son admisibles todos los medios de prueba reconocidos por la legislación procesal. El contribuyente, responsable o tercero interesado podrá sugerir o solicitar medidas de prueba a realizar por la propia fuerza fiscalizadora de la Dirección General.

ARTICULO 141: Los datos y hechos consignados por los contribuyentes y responsables en sus declaraciones juradas e informaciones administrativas gozan de la presunción de verdad bajo las siguientes condiciones:

1º) Que dichas declaraciones e informaciones sean realizadas conforme con las normas de este Código y sus reglamentaciones.

2º) Que sean congruentes entre sí, con las demás declaraciones e informaciones del mismo contribuyente o responsable, y con los libros, registraciones y documentación respaldatoria llevados de conformidad con las normas de este Código y sus reglamentaciones.

3º) Que dichas declaraciones o informaciones no hayan sido regularmente impugnadas por la Dirección General.

ARTICULO 142: Las actas emanadas de los funcionarios fiscales tendrán validez como instrumento público, en los términos y alcances previstos por el Título III del Libro II, Sección II, del Código Civil, y harán plena fe de los actos, hechos, manifestaciones, constataciones, reconocimientos, etc., contenidos en ellas, siempre que reúnan los siguientes requisitos:

1º) Que el funcionario actuante obre dentro de los límites de su jurisdicción y competencia.

2º) Que en el acta conste el nombre y cargo del funcionario interviniente, en su caso el nombre o datos de individualización del contribuyente, responsable o tercero, el lugar y la fecha en que se realiza el acto, y la descripción detallada de la materia, acto, hecho o circunstancia consignada en

la misma.

3º) En los casos en que en el acto participe o esté presente un contribuyente, responsable o tercero, que conste dicha participación o presencia y que el mismo tuvo la oportunidad de formular las manifestaciones que creyere oportunas.

4º) Que esté firmada por el funcionario interviniente y en su caso por el contribuyente, responsable o tercero participante o presente; cuando éste no pudiere o no quisiere firmar el acta, deberá dejarse constancia de dicha circunstancia, supliéndose su firma por la de dos testigos, o con la intervención de otro funcionario u oficial público, con aclaración del nombre, domicilio y documento de identidad de los mismos.

ARTICULO 143: Con las mismas condiciones consignadas en el artículo anterior, tendrán también fuerza probatoria los actos y las actas emanadas de los funcionarios fiscales nacionales o de otras jurisdicciones provinciales.

ARTICULO 144: Los actos de los funcionarios de la Dirección General producidos en el territorio nacional, pero fuera de la provincia, tendrán validez en ésta sujetos a los siguientes requisitos:

1º) Que sean realizados dentro del marco de jurisdicción y competencia de las Delegaciones de la Dirección General establecidas fuera del territorio provincial, o por funcionarios de fiscalización autorizados por el Director General o quien lo sustituya.

2º) Que estén referidos a hechos imponibles o generadores de tributos regidos por este Código, en los términos y con los alcances previstos con carácter general por el artículo 2º.

ARTICULO 145: Las citaciones, notificaciones e intimaciones serán practicadas en cualquiera de las siguientes formas:

1º) Por carta certificada con aviso especial de retorno sin cubierta, por telegrama colacionado, o por cualquier otro medio postal fehaciente.

2º) Personalmente, por medio de un empleado de la Dirección General, quien dejará constancia en acta de la diligencia practicada y del lugar, día y hora en que se efectuó. Si el destinatario no estuviese o se negare a firmar el acta se dejará constancia de ello; en días siguientes hábiles concurrirán al domicilio del interesado dos funcionarios de la Dirección General para notificarlo. Si tampoco fuera hallado, dejarán la resolución, intimación, carta, etc. que deben entregar, en sobre cerrado, a cualquier persona que se hallare en el domicilio, procurando que quien lo reciba suscriba el acta. Si no hubiera persona dispuesta a recibir la notificación, o si el interesado se negare a firmar, los funcionarios actuantes procederán a fijar en la puerta de su domicilio y en sobre cerrado el instrumento antes citado.

3º) Por nota o esquila numerada, con firma fascimular del funcionario autorizado, remitida con aviso de retorno y en las condiciones que determine la Dirección General para su emisión y demás recaudos.

4º) Por cédula, por medio de los empleados que designe el Director General,

quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial.

5º) En caso de que no pudiera practicarse la citación, notificación o intimación en alguna de las formas antedichas, por no conocerse el domicilio del contribuyente, responsable o tercero, la misma se efectuará mediante edictos publicados durante tres días en el Boletín Oficial o, en su defecto, en otro medio periodístico de circulación en la provincia.

ARTICULO 146: Toda acción o gestión iniciada ante la Dirección General por contribuyentes, responsables o terceros en que los mismos dejaren transcurrir seis meses sin realizar actos tendientes a su diligenciamiento o resolución, se considerará caduca por perención de instancia. La perención se opera por el simple transcurso del tiempo sin necesidad de declaración expresa.

## CAPITULO II

### La fiscalización

ARTICULO 147: Las actuaciones de verificación, fiscalización e investigación que se realicen en locales o domicilios de contribuyentes, responsables y terceros, o en la vía pública, y aún en las oficinas de la Dirección General con la asistencia de aquéllos, deberán constar en actas confeccionadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 142.

ARTICULO 148: Durante el curso de las actuaciones administrativas que resulten del ejercicio de las facultades de verificación, fiscalización e investigación, la Dirección General podrá solicitar al juez competente, mediante resolución fundada firmada por juez administrativo, que se decreten algunas de las medidas cautelares que autoriza este Código y el Código Procesal Civil y Comercial, en los términos y condiciones previstos por el artículo 25, inciso 5º, del presente. Dichas medidas caducarán automáticamente si, dentro de los treinta días de dictadas, no se iniciare el procedimiento de determinación de oficio o el sumario contravencional respectivos.

ARTICULO 149: Cuando el contribuyente, responsable o tercero fiscalizado estimare que las actuaciones de verificación, fiscalización o investigación de la Dirección General son abusivas, excesivas o ilegales, podrá manifestar expresa y fehacientemente su oposición a las mismas ante los funcionarios actuantes o sus superiores jerárquicos inmediatos. Si la Dirección General no acogiere su reclamo en el término de cinco días, podrá intentar la acción de amparo regulada por este Código.

### CAPITULO III

#### La determinación de oficio

ARTICULO 150: Cuando no se hayan presentado declaraciones juradas, o resultaren impugnables las presentadas o las liquidaciones efectuadas por el fisco sobre la base de los datos aportados por el contribuyente o responsable, la Dirección General procederá a determinar de oficio la materia imponible o, en su caso, el quebranto impositivo, y a liquidar la obligación tributaria correspondiente.

El procedimiento se iniciará por el juez administrativo con una vista al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o cargos que se formulen, con detallado fundamento de los mismos. Dentro de los diez días, prorrogables por otro lapso por una única vez, el interesado podrá formular por escrito su descargo y presentar u ofrecer toda la prueba que haga a su derecho.

Evacuada la vista, o vencido el término señalado, el juez administrativo dictará resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago del mismo dentro del plazo de quince días. La determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con los intereses resarcitorios o moratorios que correspondieren, calculados hasta la fecha de vencimiento del plazo indicado, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, conforme con las reglas del presente Código.

Transcurridos noventa días, contados desde la evacuación de la vista o del vencimiento del término establecido en el segundo párrafo, sin que se dictare resolución, el contribuyente o responsable podrá requerir pronto despacho. Pasados treinta días de tal requerimiento sin que la resolución fuere dictada, caducará el procedimiento, sin perjuicio de la validez de las actuaciones administrativas realizadas. Por única vez, la Dirección General podrá iniciar un nuevo proceso de determinación, previa autorización del superior inmediato del juez administrativo actuante.

No será necesario dictar resolución determinando de oficio el tributo si antes de ese acto el contribuyente o responsable prestare conformidad a la pretensión fiscal exteriorizada en la vista. En tal caso, dicha conformidad surtirá, para el contribuyente o responsable, los efectos de una declaración jurada y para el fisco de una determinación de oficio.

ARTICULO 151: El procedimiento establecido en el artículo anterior deberá ser cumplido cuando se pretenda efectivizar la solidaridad prevista en los artículos 39 y 40.

ARTICULO 152: Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los inspectores y demás empleados de la Dirección General en el curso de la verificación y fiscalización de tributos no constituyen determinación administrativa de éstos.

ARTICULO 153: Cuando el tributo, por imperio de este Código o de las normas tributarias pertinentes, deba determinarse mediante liquidación administrativa, la Dirección General pondrá a disposición del contribuyente o responsable la liquidación respectiva quince días antes del vencimiento del del tributo. Dentro de ese término, o dentro de los quince días posteriores a la fecha en que tomó o pudo tomar conocimiento de la liquidación, cuando ésta no le hubiera sido notificada antes del vencimiento general del tributo, el interesado podrá manifestar su disconformidad y ofrecer la prueba que haga a su derecho. Se aplicarán a este procedimiento, en lo que resultare pertinente, las normas del artículo 150.

Cuando dicha disconformidad se limite a errores de cálculo y no se refiera a cuestiones conceptuales, la misma se resolverá sin sustanciación.

ARTICULO 154: Cuando el juez administrativo, en los casos previstos por los artículos 150 y 153, no pueda determinar o liquidar el tributo con conocimiento cierto de la materia imponible, estimará el mismo en función de los elementos conocidos que permitan presumir la existencia y la magnitud de la materia imponible, en su caso de los quebrantos fiscales, y de la obligación tributaria.

La estimación de oficio sobre base presunta se fundará en los hechos y circunstancias que por su vinculación normal con el hecho imponible o generador propio de cada tributo, permitan inducir en el caso particular la existencia y el monto de aquél. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente o responsable, el movimiento de las cuentas bancarias, o cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Dirección General o que suministren los agentes de retención y percepción, bancos, cámaras o asociaciones empresarias, entidades gremiales, entidades públicas, etc.

Podrán aplicarse, a los fines indiciarios aludidos en el párrafo anterior, los promedios y coeficientes que establezca con carácter general la Dirección con relación a explotaciones de un mismo género, mediante el dictado de normas reglamentarias complementarias.

ARTICULO 155: A los efectos de la estimación de oficio prevista en el artículo anterior, podrán tomarse como presunción general, salvo prueba en contrario, las siguientes:

1º) Que los ingresos brutos equivalen por lo menos a dos veces el monto del alquiler respectivo de los inmuebles destinados al desarrollo de las actividades gravadas.

29) Cuando los precios de inmuebles que figuren en las escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, y ello no sea explicado satisfactoriamente por los interesados, por las condiciones de pago, por características peculiares del inmueble o por otras circunstancias, la Dirección General podrá solicitar valuaciones e informes a entidades públicas y privadas. Asimismo, dicho precio podrá establecerse mediante la aplicación de tablas de evaluación elaboradas sobre la base de la información obtenida. En ningún caso el precio a que se refiere este inciso podrá ser inferior a la valuación fiscal del respectivo inmueble.

39) El resultado de promediar el total de ventas, de prestaciones de servicios o de cualquier otra operación controlada por la Dirección General en no menos de cinco días continuos o alternados de un mismo mes, multiplicado por el total de días hábiles comerciales, representan las ventas, prestaciones de servicios u operaciones presuntas del contribuyente bajo control durante ese mes.

Si dicho control se efectuara en no menos de cuatro meses alternados de un mismo ejercicio fiscal, el promedio de ventas, prestaciones de servicios u operaciones se considerará suficientemente representativo y podrá también aplicarse a los demás meses no controlados del mismo período fiscal.

La diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones existentes entre las de ese período fiscal y lo declarado o registrado ajustado impositivamente se considerará Ingreso Bruto omitido, gravado o exento, en la misma proporción que tengan los que han sido registrados o declarados en el ejercicio anterior como gravados o exentos.

El porcentaje de aumento que resulte de relacionar el importe de las diferencias de ventas, prestaciones de servicios u operaciones declaradas o registradas en el período considerado, se aplicará asimismo sobre las ventas, prestaciones de servicios u operaciones declaradas o registradas del ejercicio anterior.

ARTICULO 156: Las presunciones establecidas en los distintos incisos del artículo anterior no podrán aplicarse conjuntamente para un mismo gravamen por un mismo período fiscal.

ARTICULO 157: La determinación de oficio de los tributos puede ser parcial, cuando los aspectos que han sido objeto de fiscalización y/o impugnación han sido definidos con precisión por el juez administrativo y ésta ha dejado constancia del carácter parcial de la determinación. En tal caso, sólo serán susceptibles de nueva determinación aquellos aspectos no considerados.

ARTICULO 158: Cuando sea procedente la liquidación de intereses moratorios, la aplicación de los mismos deberá efectuarse mediante el procedimiento establecido por los artículos 150 o 153, según correspondiere.



## CAPITULO IV

### La repetición de tributos

ARTICULO 159: Los contribuyentes, responsables y terceros tienen acción para repetir los tributos, pagos a cuenta e intereses que hubieran abonado en exceso o sin causa, ya sea espontáneamente o a requerimiento de la Dirección General, aunque en el momento del pago no hubieran formulado reserva alguna.

La acción deberá iniciarse con un reclamo administrativo ante la Dirección General, en el que deberán exponerse detalladamente todos los hechos y fundamentos que hagan al derecho del interesado, y presentar u ofrecer la prueba pertinente.

El juez administrativo, previa sustanciación de las pruebas ofrecidas o de las otras medidas que considere oportuno disponer, deberá dictar resolución fundada dentro de los sesenta días de la fecha de la interposición del reclamo. Si la parte interesada hubiera solicitado y obtenido un plazo de más de treinta días para la producción de la prueba a su cargo, el término para dictar resolución se considerará prorrogado en lo que excediese del citado plazo. Vencido el término para dictar resolución, el interesado podrá requerir pronto despacho. Pasados treinta días de tal requerimiento sin que la resolución fuere dictada, el contribuyente o responsable podrá considerar denegado su reclamo.

ARTICULO 160: La reclamación del contribuyente y demás responsables por repetición de tributos, pagos a cuentas e intereses facultará a la Dirección General, cuando estuvieran prescriptas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, dado el caso, para determinar y exigir el tributo que resulte adeudarse, hasta compensar el importe por el que prosperase dicho reclamo.

Cuando a raíz de una verificación fiscal, en la que se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible o generador, determinando tributo a favor del fisco, se compruebe que la apreciación rectificada ha puesto de manifiesto la existencia de pagos improcedentes o en exceso por el mismo u otros gravámenes, la Dirección General compensará los importes pertinentes, aun cuando la acción de repetición se hallare prescripta, hasta anular el tributo resultante de la determinación.

ARTICULO 161: No procede la acción de repetición regulada en el presente capítulo respecto de pagos de obligaciones fiscales realizados en cumplimiento de determinaciones o liquidaciones de oficio sustanciadas de acuerdo con los artículos 150 y 153.

ARTICULO 162: Cuando la acción de repetición se refiera a obligaciones fiscales retenidas o percibidas, la misma podrá ser ejercida por los respectivos agentes de retención o percepción, o por el contribuyente, de acuerdo con las siguientes reglas:

1º) Cuando la acción sea ejercida por los agentes de retención o percepción éstos deberán presentar la nómina de los contribuyentes a quienes la Dirección General abonará, de corresponder, los importes cuestionados, salvo que dichos agentes acrediten en forma la autorización de aquéllos para su cobro.

2º) Cuando la acción sea ejercida por el contribuyente, la Dirección verificará si el agente respectivo ingresó oportunamente al fisco las sumas retenidas o percibidas.

## CAPITULO V

### Los sumarios contravencionales

ARTICULO 163: Salvo las excepciones expresamente previstas por este Código y las leyes tributarias especiales, la aplicación administrativa de las penas contravencionales en materia tributaria se efectuará previa instrucción de un sumario, cuya apertura deberá disponerse por resolución fundada emanada del juez administrativo competente. En dicha resolución deberá constar claramente el acto, hecho u omisión que se atribuye al presunto infractor.

ARTICULO 164: La resolución que ordena la sustanciación del sumario será notificada al presunto infractor, corriéndosele asimismo vista de las actuaciones administrativas. Se observarán para la instrucción del sumario las normas del artículo 150.

ARTICULO 165: Cuando el conocimiento de las presuntas infracciones surgiere de impugnaciones u observaciones vinculadas a la determinación de las obligaciones tributarias, y se tratare de contravenciones materiales, las sanciones deberán aplicarse en la misma resolución que determine el gravamen u obligación. La notificación de las resoluciones determinativas de obligaciones fiscales sin aplicación de sanciones implica que la Dirección General no ha encontrado mérito para ello y la consiguiente indemnidad del contribuyente o responsable.

## CAPITULO VI

### Recursos

ARTICULO 166: Contra las resoluciones que determinen tributos, pagos a cuenta y accesorios, apliquen sanciones o se dicten en reclamos por repetición autorizado por este Código, los contribuyentes y responsables podrán interponer, a su opción, uno de los siguientes recursos:

1º) Recurso de reconsideración para ante el superior.

2º) Recurso de apelación para ante el Tribunal Fiscal de la Provincia.

ARTICULO 167: Los recursos establecidos en el artículo anterior son recíprocamente excluyentes. El plazo para su interposición es de diez días, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución respectiva. Vencido dicho plazo sin que se haya interpuesto alguno de dichos recursos, la resolución quedará firme. El recurso de reconsideración se interpondrá ante la misma autoridad que dictó el acto. El recurso de apelación se presentará directamente ante el Tribunal Fiscal, informando dicha circunstancia a la autoridad que dictó el acto recurrido. Ambos recursos tienen efectos suspensivos.

ARTICULO 168: Cuando en este Código o en su reglamentación no se encuentre previsto un procedimiento recursivo especial, los contribuyentes, responsables y terceros interesados podrán interponer contra el acto administrativo de alcance individual o particular respectivo emanado de funcionarios de la Dirección General un recurso de apelación fundado para ante el director general.

El recurso deberá ser presentado dentro de los diez días de notificado el acto que se impugna ante el funcionario que dictó el mismo y no tendrá efectos suspensivos; sin embargo, el director general podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.

Los actos administrativos de alcance individual o particular emanados del director general podrán ser recurridos ante el mismo, en la forma y plazos previstos en este artículo.

La resolución recaída en esta instancia recursiva tendrá carácter de definitiva, pudiendo sólo impugnarse mediante demanda contencioso administrativa.

ARTICULO 169: Cuando no se discutan aspectos referidos a la procedencia del tributo o de la obligación tributaria principal, u otros aspectos conceptuales vinculados con la misma, las liquidaciones administrativas de intereses resarcitorios sólo podrán recurrirse mediante la vía prevista por el artículo anterior.

## CAPITULO VII

### Denuncia y querella penal

ARTICULO 170: Cuando la Dirección General tomare conocimiento de la presunta comisión de un delito tributario tipificado por la Ley nacional Nº 23.771 y/o la que la modifique o sustituya, promoverá la acción penal respectiva mediante denuncia o querella ante el juez competente, previo dictado por parte del juez administrativo interviniente -cuando ello correspondiere- de la resolución de determinación de oficio y/o de aplicación de sanciones contravencionales.

La promoción de la causa penal no impedirá la continuación de los procedimientos o recursos administrativos, contencioso administrativos o judiciales vinculados con los mismos hechos, ni el dictado de resolución o sentencia en ellos.

En los supuestos de denuncias formuladas directamente ante el juez por personas o entidades que no fueren la autoridad tributaria competente en la materia, el magistrado, sin perjuicio de las medidas de urgencia que juzgue necesario disponer, correrá vista por noventa días a la Dirección General a los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo.

## CAPITULO VIII

### Normas supletorias

ARTICULO 171: En todo lo no previsto por este Título serán de aplicación supletoria la Ley provincial de Procedimientos Administrativos, el Código Procesal Civil, Comercial y de Minería y, en su caso, el Código de Procedimientos en Materia Penal.

TITULO IX

PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES

CAPITULO I

:

Los representantes fiscales

ARTICULO 172: En todas las causas judiciales o que tramiten ante el Tribunal Fiscal que versen sobre la aplicación de este Código o de las leyes tributarias especiales, incluidas las causas penales promovidas según lo dispuesto por el artículo 170, la representación de la Dirección General en todas las instancias será ejercida por los funcionarios competentes de la Fiscalía de Estado, de acuerdo con las normas de la Ley Nº 5.558, o por los funcionarios que la propia Dirección General designe, pudiendo estos últimos ser patrocinados por los letrados de la repartición.

ARTICULO 173: Mientras la representación no sea ejercida por funcionarios designados por la Dirección General, el fisco será representado por los citados funcionarios de la Fiscalía de Estado, quienes recibirán instrucciones directas de la Dirección en las materias técnicas y jurisdiccionales propias de ésta, a la que deberán informar de las gestiones que realicen. La intervención de los funcionarios especiales designados por la Dirección General excluirá la representación de los funcionarios de la Fiscalía de Estado en cualquier estado del juicio, sin perjuicio de la facultad del Fiscal de Estado de ejercer la supervisión letrada.

ARTICULO 174: La personería de los funcionarios especiales que ejerzan la representación de la Dirección General será acreditada con copia de la resolución o Decreto de su designación, certificada por la Dirección, si de dichos actos surge su competencia, o por certificación especial expedida por la repartición.

ARTICULO 175: La Dirección General anticipará a sus representantes los fondos necesarios para los gastos que demande la tramitación de los juicios, con cargo de rendir cuenta documentada de su intervención y de reintegrar las cantidades invertidas cuando perciban su importe de la parte vencida. A estos efectos se dispondrá la apertura de la cuenta correspondiente.

ARTICULO 176: Los funcionarios especiales que ejerzan la representación en juicio de la Dirección General tendrán derecho a percibir honorarios, salvo

cuando éstos estén a cargo de la Provincia y siempre que haya quedado totalmente satisfecho el crédito fiscal. La Dirección General podrá establecer un régimen de distribución de dichos honorarios, tomando en consideración la participación que hayan tenido en la gestión de la causa otros funcionarios.

## CAPITULO II

### El juicio de apremio

ARTICULO 177: La ejecución fiscal de tributos, pagos a cuenta, intereses y multas tramitará por la vía de apremio establecida por el presente capítulo, sirviendo de suficiente título a tal efecto la boleta de deuda expedida por la Dirección General.

ARTICULO 178: El apremio fiscal será procedente en los siguientes casos:

1º) Respecto de determinaciones o liquidaciones practicadas por los contribuyentes y responsables.

2º) Respecto de determinaciones o liquidaciones de tributos, pagos a cuenta e intereses practicadas por el fisco consentidas o aceptadas por contribuyentes y responsables, o que se encuentren firmes en instancia administrativa.

3º) Cuando mediare reconocimiento de deuda por parte del contribuyente o responsable, y en la medida de ese reconocimiento.

4º) Respecto de multas y sus accesorios, cuando se encontrare firme la resolución respectiva.

ARTICULO 179: El juicio de apremio será considerado juicio ejecutivo a todos sus efectos, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el presente capítulo.

ARTICULO 180: Los pagos efectuados después de iniciado el juicio, los pagos mal imputados o no comunicados en debida forma por el contribuyente o responsable, no serán hábiles para fundar excepción. Acreditados los mismos en autos, procederá el archivo de éstos o la reducción del monto demandado, con costas a los ejecutados.

ARTICULO 181: La ejecución fiscal de tributos, pagos a cuenta o intereses determinados o liquidados por contribuyentes y responsables no inhibe a la Dirección General de impugnar dichas determinaciones o liquidaciones de acuerdo con lo establecido por este Código.

ARTICULO 182: En los casos de sentencias dictadas en los juicios de apremio por cobros de tributos, pagos a cuenta e intereses, la acción de repetición, cuando ella correspondiere, sólo podrá deducirse una vez satisfecho el monto adeudado o ejecutado, accesorios y costas.

ARTICULO 183: El cobro de tributos, pagos a cuenta e intereses por la vía de apremio se tramitará independientemente del procedimiento de aplicación de sanciones a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos.

ARTICULO 184: Iniciada la acción, si el ejecutado no abonara en el acto de intimársele el pago, quedará desde ese momento citado de venta. La intimación de pago importará la citación para oponer excepciones, debiendo dejarse al ejecutado copia de la diligencia, del escrito de iniciación y de los documentos acompañados.

ARTICULO 185: De las excepciones opuestas y documentación acompañada se dará traslado con copias por cinco días al ejecutante, debiendo el auto que así lo disponga notificarse personalmente o por cédula. Las únicas excepciones admisibles son las siguientes:

- 1º) Pago total o parcial documentado.
- 2º) Espera documentada.
- 3º) Compensación y remisión en los casos que las mismas fueren procedentes por aplicación de este Código, debidamente documentadas.
- 4º) Falta de legitimación activa o pasiva.
- 5º) Inhabilidad de título basada exclusivamente en vicios de forma de la boleta de deuda o en no haberse verificado ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 178.
- 6º) Pendencia de recursos concedidos con efectos suspensivos.
- 7º) Incompetencia.
- 8º) Prescripción.
- 9º) Cosa juzgada.

ARTICULO 186: El diligenciamiento de los mandamientos de ejecución y embargo, y las notificaciones, podrán estar a cargo de empleados de la Dirección General. A propuesta de ésta, los jueces o magistrados que correspondan designarán al funcionario o empleado respectivo como oficial de justicia especialmente habilitado para estas funciones. El costo que demande la realización de las diligencias fuera del ámbito urbano será soportado por la parte condenada en costas.

### CAPITULO III

#### El Tribunal Fiscal

ARTICULO 187: El Tribunal Fiscal de la Provincia de San Juan tendrá su sede en la capital de la provincia y su jurisdicción se extiende a todo el territorio de la misma. Los jueces del Tribunal podrán establecer sus despachos en cualquier lugar del territorio provincial a los efectos de la tramitación de las causas que conozcan.

ARTICULO 188: El Tribunal estará constituido por tres vocales, dos abogados y uno contador público nacional, argentinos, de treinta o más años de edad, y con cuatro o más años de ejercicio de la profesión, designados por el Poder Ejecutivo previo concurso de antecedentes que acrediten idoneidad en materia tributaria.

ARTICULO 189: Cada vocal será titular de una nominación y actuará individualmente, salvo el caso de plenario. Estará asistido por un secretario que deberá ser contador o abogado según que el vocal sea abogado o contador, respectivamente. El Presidente del Tribunal será designado por el Poder Ejecutivo y durará dos años en sus funciones. La vicepresidencia la ejercerá el vocal más antiguo. Los vocales gozarán de la misma remuneración que los jueces de Primera Instancia.

ARTICULO 190: Los vocales del Tribunal permanecerán en el cargo mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser removidos previa decisión de un jurado integrado por los miembros de la Corte de Justicia, el Fiscal de Estado y el Secretario de Hacienda y Finanzas, presidido por el Presidente de la Corte. Regirán respecto de los vocales del Tribunal Fiscal las mismas incompatibilidades vigentes para los jueces del Poder Judicial de la Provincia.

ARTICULO 191: La distribución de expedientes se hará mediante sorteo público, de modo tal que sean adjudicados a los vocales en un número suficientemente uniforme.

Cuando una misma cuestión jurídica haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de los distintos vocales, se fijará, mediante su reunión en plenario, la interpretación de la ley que los mismos deberán aplicar obligatoriamente.

La convocatoria al plenario será efectuada por el Presidente del Tribunal, de oficio, a pedido de otro vocal, o a solicitud de parte. Cuando haya fundamentos para entender que la jurisprudencia plenaria debe ser modificada, se seguirá el mismo procedimiento. La convocatoria a plenario implica la suspensión de los pronunciamientos relativos a las cuestiones



jurídicas en debate, quedando asimismo suspendidos los términos para dictar sentencia en los expedientes respectivos.

ARTICULO 192: Los vocales del Tribunal no serán recusables, pero deberán excusarse de intervenir en los casos previstos en el Código de Procedimientos Civil y Comercial. La excusación deberá ser aceptada por el Presidente del Tribunal, y si éste se excusase, por el Vicepresidente. En caso de ser aceptada la excusación, el vocal será reemplazado por otro vocal, de acuerdo con el reglamento de procedimientos que dictará el Tribunal.

ARTICULO 193: El Tribunal dictará un reglamento de procedimientos que complementará las disposiciones de este Código y que adaptará a las características especiales de esta materia la normas pertinentes del Código de Procedimientos Civil y Comercial.

ARTICULO 194: El Tribunal Fiscal tiene los mismos poderes jurídicos de imperio que los jueces del Poder Judicial de la provincia.

ARTICULO 195: El Tribunal Fiscal tendrá, además, facultades para:

1º) Proponer al Poder Ejecutivo la designación de secretarios.

2º) Conceder licencia con goce de sueldo o sin él, en las condiciones que autoricen las disposiciones administrativas a los miembros del Tribunal.

El Presidente representará al Tribunal, suscribirá sus comunicaciones, excepto los oficios, mandamientos, notificaciones y demás actos del trámite de las causas a cargo de los vocales, formulará anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal para su posterior elevación al Poder Ejecutivo, designará el personal que provea el presupuesto de gastos, otorgará las licencias a los secretarios y demás personal y entenderá en las restantes cuestiones administrativas.

ARTICULO 196: El Tribunal Fiscal será competente para conocer:

1º) De los recursos de apelación previstos por el artículo 186.

2º) De la acción de amparo prevista por el artículo 213.

#### CAPITULO IV

##### Procedimiento ante el Tribunal Fiscal

ARTICULO 197: Serán días hábiles a todos los efectos procesales vinculados con las causas que tramiten ante el Tribunal Fiscal los días hábiles judiciales. Regirán asimismo para el Tribunal las ferias judiciales

establecidas o que se establezcan para el Poder Judicial de la provincia.

ARTICULO 198: En la instancia ante el Tribunal los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales o por mandatario especial, el que acreditará su calidad de tal mediante simple autorización certificada por el secretario del Tribunal o escribano público.

ARTICULO 199: La representación y patrocinio ante el Tribunal se ejercerá por las personas autorizadas para actuar en causas judiciales.

Tales funciones podrán ser desempeñadas, además, por doctores en ciencias económicas o contadores públicos inscriptos en la respectiva matrícula.

ARTICULO 200: Los procesos serán escritos, sin perjuicio de la facultad de los vocales para llamar a audiencias, durante el término de prueba, o cuando así lo estime necesario.

ARTICULO 201: El vocal impulsará de oficio el procedimiento, teniendo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria, en cuyo caso, si el desistimiento o allanamiento fuera aceptado por la contraparte, deberá dictar sentencia teniendo a la litigante por desistida o allanada según corresponda. Cuando se allanare, el Fisco deberá hacerlo por resolución fundada suscripta por el Director General o quien lo sustituya.

ARTICULO 202: Los recursos de apelación previstos por el artículo 166 se presentarán por escrito. Dentro de los tres días de presentados los mismos, el recurrente deberá comunicar a la autoridad fiscal que dictó el acto la interposición del recurso; el incumplimiento de esta obligación autorizará a la Dirección General a ejecutar el acto impugnado.

En el recurso el apelante deberá expresar todos sus agravios, con su fundamentación pertinente, oponer excepciones, ofrecer la prueba y acompañar la instrumental que haga a su derecho. Deberá, asimismo, indicar clara y expresamente qué parte o aspecto de la resolución recurrida se apela.

La interposición del recurso no suspenderá la intimación de pago respectiva, la que deberá cumplirse en la forma establecida por este Código, salvo por la parte apelada.

ARTICULO 203: Se dará traslado del recurso de apelación a la apelada por el término de quince días para que lo conteste, oponga excepciones, acompañe el expediente administrativo y ofrezca prueba. Si no lo hiciere, a pedido del

apelante, el vocal interviniente hará un nuevo emplazamiento a la Dirección General por el término de diez días, bajo apercibimiento de rebeldía. El emplazamiento será dispuesto de oficio si hubieran transcurrido veinte días desde el vencimiento del término original para contestar el recurso.

ARTICULO 204: La rebeldía no alterará la secuencia del proceso y si en algún momento cesare, continuará la sustanciación de la causa sin que pueda retrogradar en ningún caso.

ARTICULO 205: Las excepciones en todos los casos tendrán el carácter de defensas de fondo y serán resueltas en la sentencia conjuntamente con el resto de la causa.

ARTICULO 206: Una vez contestado el recurso, si no hubiere prueba a producir, el vocal dictará sentencia.

ARTICULO 207: Habiendo hechos controvertidos y habiéndose ofrecido prueba por las partes, el vocal resolverá sobre la pertinencia y admisibilidad de la misma, mandará a producirla en su caso y fijará un término que no podrá exceder de cuarenta días para su producción.

ARTICULO 208: Las diligencias de prueba se tramitarán directamente por las partes o sus representantes y su resultado se incorporará al proceso. El vocal prestará su asistencia para asegurar el efecto indicado, allanando los inconvenientes que se opongan a las diligencias y emplazando a quienes fueran remisos en prestar su colaboración. El vocal tendrá a esos efectos, para el caso de juzgarlo necesario, las facultades que el artículo 25 acuerda a la Dirección General.

ARTICULO 209: Los pedidos de informes a las entidades públicas o privadas podrán ser requeridos por los representantes de las partes. Deberán ser contestados por funcionarios autorizados, con aclaración de firma, el que deberá comparecer ante el vocal si éste lo considerare necesario, salvo que designare otro funcionario especialmente autorizado a tal efecto.

ARTICULO 210: Vencido el período de prueba el vocal declarará su clausura y pondrá los autos a disposición de las partes, por el término de diez días, para la producción y presentación de los alegados.

Hasta el momento de dictar sentencia podrá el vocal disponer las medidas para mejor proveer que estime oportunas, incluso medidas periciales mediante funcionarios que le proporcionará la Dirección General, los que actuarán bajo su exclusiva dependencia.

ARTICULO 211: Presentados los alegados o vencido el término para hacerlo y, en su caso, producidas las medidas para mejor proveer, el vocal dictará sentencia dentro de los sesenta días.

ARTICULO 212: Notificada la sentencia las partes podrán solicitar, dentro de los cinco días, que se aclaren ciertos conceptos oscuros, se subsanen errores materiales o se resuelvan puntos incluidos en el litigio y omitidos en la sentencia.

ARTICULO 213: El contribuyente, responsable o tercero interesado, perjudicado en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Dirección General, o en el supuesto previsto por el artículo 149, podrá ocurrir al Tribunal Fiscal mediante el ejercicio de la acción de amparo.

Si el vocal considerare que la petición está razonablemente fundada, requerirá informe a la Dirección General con un plazo que no podrá exceder los cinco días. Podrá, asimismo, dictar medidas de prueba y para mejor proveer, habilitando si fuere necesario días y horas. Luego, dictará sentencia sin más trámite, resolviendo lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del afectado.

## CAPITULO V

### Recursos

ARTICULO 214: Contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de determinación de obligaciones tributarias, aplicación de sanciones y repetición de tributos y accesorios, las partes podrán interponer un recurso de revisión y apelación limitada dentro de los treinta días de la notificación respectiva, para ante la Corte de Justicia de la Provincia.

El escrito de apelación se limitará a la mera interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal. La apelación se concederá en ambos efectos, salvo respecto de las sentencias que condenaren al pago de tributos, pagos a cuenta e intereses, en cuyo caso se otorgará al solo efecto devolutivo. Dentro de los quince días posteriores a la concesión del recurso, el apelante expresará agravios por escrito ante el mismo Tribunal, el que dará traslado a la otra parte para que los conteste en el mismo término, vencido el cual, haya o no contestación, se elevarán los autos a la Corte sin más sustanciación, dentro de las cuarenta y ocho horas.

La Corte podrá:

a) Declarar la nulidad de las actuaciones o resoluciones

y devolverlas al Tribunal Fiscal con apercibimiento, si hubiera violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento, salvo que, en atención a la naturaleza de la causa, juzgare más conveniente su apertura a prueba en instancia.

b) Resolver el fondo del asunto, teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados. Ello no obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que hace la sentencia de los hechos, o cuando el Tribunal Fiscal hubiere denegado pruebas ofrecidas por las partes.

ARTICULO 215: Contra las sentencias del Tribunal Fiscal recaídas en la acción de amparo, las partes podrán interponer recurso de apelación por ante la Corte de Justicia. El recurso deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las cuarenta y ocho horas. Concedido el recurso, se elevarán las actuaciones a la Corte dentro de las veinticuatro horas. En caso de ser denegado, entenderá la Corte en el recurso directo que deberá articularse dentro de las veinticuatro horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro de tercer día.

## CAPITULO VI

### Normas supletorias

ARTICULO 216: Serán de aplicación supletoria en los casos no previstos en este Título y el Reglamento Procesal que dicte el Tribunal Fiscal, el Código Procesal Civil, Comercial y de Minería.